

Gobierno PSOE-Unidas Podemos

¡Queremos HECHOS!



¡Abajo los recortes,
las contrarreformas y la
represión al pueblo catalán!

Gobierno PSOE-Unidas Podemos

Es el momento de los hechos: ¡fuera los recortes, las contrarreformas y la represión al pueblo catalán!

48 horas después de las elecciones del 10-N, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaban en el Parlamento un acuerdo para formar un Gobierno de coalición. Este hecho representa un acontecimiento de trascendencia histórica y ha levantado enormes expectativas. Millones de trabajadores y jóvenes, que en estos años han protagonizado las luchas más potentes desde la caída de la dictadura, no pueden dejar de considerar la enorme oportunidad que se abre para cambiar su presente y su futuro.

Acabar con los recortes, las contrarreformas del PP, las privatizaciones, la precariedad, o los bajos salarios no es una utopía. Tampoco lo es poner fin al entramado autoritario del Estado y sus leyes de excepción, a la represión y criminalización que sufre el pueblo y la juventud de Catalunya, y resolver la cuestión sobre bases democráticas, esto es, reconociendo el derecho a decidir. Pero hacer realidad estas aspiraciones de la mayoría de la población, requiere que este Gobierno confronte con los grandes poderes económicos, la banca y el capital financiero, plante cara al aparato judicial, policial y militar, y rechace la agenda de austeridad de la Unión Europea.

Pero la experiencia de estos años no ha pasado en balde. Quien piense que este Gobierno cuenta con un cheque en blanco se equivoca. Tanto Sánchez como Iglesias, por más expectativas y simpa-

tías que despierten, tendrán que demostrar con los hechos que son diferentes si no quieren alentar un desengaño político de grandes consecuencias.

El PSOE pierde apoyo

En una época de polarización extrema y lucha de clases descarnada, los cambios bruscos y vertiginosos son la norma. En este caso, lo que parecía imposible después de atender los mensajes de la campaña electoral, se ha hecho viable con una rapidez asombrosa. Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE no han tenido más remedio que buscar el pacto con Iglesias tras el fracaso de su estrategia.

Los resultados de las elecciones generales también han echado por tierra los planes de la clase dominante. Su objetivo de urdir un Gobierno estable basado en el PSOE y Ciudadanos ha sido imposible tras la hecatombe que han sufrido Rivera y sus secuaces. La derecha, por mucho que se haya abundado en el crecimiento electoral de Vox, sigue teniendo muchas dificultades para ensanchar su base social.

Y esta es una de las claves de la situación abierta con el 10-N. Si el PSOE, después de perder 727.772 votos, tres escaños y la mayoría absoluta en el Senado, hubiera urdido un acuerdo de investidura y legislatura con Cs y el PP, tal como muchas voces cualificadas —tan-

to dentro como fuera del partido— estaban defendiendo, su desgaste habría sido mayúsculo en cuestión de muy poco tiempo. Un pacto de esa naturaleza habría fortalecido a la extrema derecha, y también ofrecería a Unidas Podemos una gran oportunidad para recuperar terreno.

El hecho de que Sánchez se haya visto obligado a abrazar a Iglesias y regalarle los oídos —ha alabado su “generosidad”—, no puede ocultar el eje de su campaña electoral. Enfundada en la bandera rojigualda y actuando con furia contra el pueblo catalán, la dirección del PSOE ha dado alas a la extrema derecha. Por ejemplo en Andalucía, el granero tradicional de la socialdemocracia, Vox se ha convertido en la tercera fuerza a solo un 0,15% del PP, y logra 867.429 votos, el 20,39%, y 12 diputados. La suma de PP y Vox avanza mucho en la comunidad andaluza: más de 345.200 votos y 10 puntos porcentuales desde las elecciones de abril y 10 diputados (de 17 a 27). Estas son las consecuencias de la política del PSOE.

Pedro Sánchez pretendió responsabilizar a Unidas Podemos del fracaso del Gobierno de coalición que ahora defiende, buscando una alianza flexible con el partido de Albert Rivera en todos los llamados asuntos de “Estado”. Y lo quería para poder descargar sobre los hombros de la clase obrera y la juventud nuevos recortes y contrarreformas, algo que no

se cansó de repetir Pablo Iglesias en sus mítines electorales. Sería importante que no lo olvidase cuando se siente en su silla de vicepresidente.

El objetivo de aumentar su apoyo entre la llamada “mayoría cautelosa”—utilizando las palabras del gurú de La Moncloa, Iván Redondo— ha sufrido un fuerte revés. No han arañado nada de los votos perdidos por Ciudadanos, se han dejado cientos de miles en la abstención y su campaña españolista solo ha arrojado agua al molino de la derecha franquista.

Colapso de Ciudadanos y avance de la extrema derecha

Apenas hace siete meses, en las elecciones de abril, Ciudadanos se colocó 200.000 votos por debajo del Partido Popular (4.136.600 frente a 4.356.023) y a solo 9 escaños (57 frente a 66). Hoy, con Rivera dimitido y fuera de la política, con Cs desapareciendo de numerosas comunidades autónomas y con unos datos extremadamente negativos en Catalunya (216.000 votos, un 5,61%, cuando en las autonómicas catalanas de diciembre de 2017 obtuvo 1.109.732, el 25,2%), una de las apuestas estratégicas más importantes de la clase dominante se descompone.

La causa de esta debacle no se explica únicamente por los errores tácticos de Rivera o por su soberbia. En realidad, el hundimiento de Cs tiene más que ver con la orientación general de la clase dominante, que ha hecho de la agitación españolista y la represión de los derechos democráticos del pueblo de Catalunya el santo y seña de todos los partidos que se consideran pilares del régimen del 78.

Rivera basó su política en ver quién era más facha, quién decía las barbaridades más estruendosas contra Catalunya, quién proclamaba con más fuerza que había que volver al 155 y detener a Torra. Pero, en un contexto de polarización tan fuerte, la base social y electoral de la derecha —movilizada con una sobredosis de veneno anticatalán y un enorme deseo de venganza contra la clase obrera y la juventud por las luchas de estos años— se ha agrupado en torno a las formaciones que mejor lo garantizaban.

PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma agruparon en las elecciones de abril un





total de 11.276.920 votos, equivalente al 43,2%, y 149 diputados. El 10-N han reunido 10.395.920, es decir, 881.000 menos, un 43,1% y 152 diputados, en un contexto de crecimiento de la abstención: 6 puntos más que en abril (10,5 millones).

No seremos los marxistas quienes minicemos la trascendencia del aumento electoral de la extrema derecha, pero igual de erróneo sería exagerarlo ocultando la auténtica correlación de fuerzas en la sociedad y la capacidad que posee la clase obrera para batir a esta morralla política.

La extrema derecha de Vox no es algo nuevo, es la misma que existía agazapada en el seno del Partido Popular pero que hoy se muestra a cara descubierta y envalentonada. Su desarrollo, desde sus inicios inciertos en diciembre de 2013, está ligado a los acontecimientos excepcionales de la lucha de clases en estos años, y a los cambios que se han producido en el campo de la izquierda.

La irrupción de Podemos expresó en las urnas el movimiento de masas más importante desde los años de la Transición, y el profundo giro a la izquierda entre millones de trabajadores, jóvenes y sectores empobrecidos de las capas medias. Poco tiempo después, en Catalunya se desataba una movilización popular sin precedentes que mandó un obús a la línea de flotación del régimen del 78. Las jornadas del 1 y 3 de octubre de 2017 abrieron una crisis revolucionaria de largo alcance que todavía no se ha podido liquidar.

Para hacer frente a este desafío, las fuerzas combinadas del aparato del Estado, la oligarquía financiera —incluyendo a la burguesía catalana—, los partidos del sistema y los medios de comunicación afines, se han lanzado a una carrera desenfrenada de criminalización del pueblo catalán, jaleando el nacionalismo españolista más rabioso. Vox ha llevado hasta las últimas consecuencias el programa que han esgrimido el resto de las formaciones del régimen, incluido el PSOE.

La pequeña burguesía enfurecida y nostálgica del franquismo, miles de “pequeños empresarios” que no son más que escoria explotadora, cientos de miles de funcionarios del Estado y de las fuerzas represivas de la policía, la Guardia Civil y el ejército..., todo ese polvo social movilizado en torno a la propa-

ganda más reaccionaria en defensa de la “unidad sagrada de la patria”, el racismo y la homofobia, ha visto una bandera de lucha en Vox. Atraídos por la ausencia de complejos a la hora de defender su ideario fascista, han elevado a Abascal a un pedestal.

La extrema derecha se nutre de la crisis social del capitalismo y de la impotencia de la democracia parlamentaria y sus representantes tradicionales para sacar a la sociedad del *impasse*. Vox es el partido de la desesperanza contrarrevolucionaria y constituye una gran amenaza para el movimiento obrero, para sus conquistas económicas y políticas, y para los derechos democráticos. Precisamente por ello, solo aplicando una política que rompa definitivamente con las lacras de este sistema y movilice la fuerza de millones de trabajadores y jóvenes se podrá combatir con éxito a estas fuerzas reaccionarias.

Con todo, el avance de Vox hay que abordarlo con un sentido de la proporción. Es cierto que respecto a las elecciones de abril ganan 962.890 votos (pasan de 2.677.173 y un 10,26%, a 3.640.063 y un 15,09%) y más que duplican sus diputados: de 24 a 52. Pero estos resultados sobre todo señalan una nueva redistribución de los apoyos a un bloque reaccionario que vuelve a fracasar en su intento de hacerse con el Gobierno. Vox y

PP avanzan juntos 1,6 millones de votos respecto al mes de abril, pero Cs pierde 2,5 millones.

La evolución electoral de Unidas Podemos

En Catalunya ¡PP, Vox y Cs suman tan solo 6 diputados de un total de 48! En la Comunidad Autónoma Vasca no obtienen representación parlamentaria ni el PP, ni Vox, ni Cs. A diferencia del PSOE o Unidas Podemos, la izquierda independentista ha cosechado buenos resultados. En Euskal Herria, EH Bildu pasa de 4 a 5 parlamentarios; en Catalunya, la CUP logra 2 diputados por Barcelona y ERC, aunque baja de 15 a 13 escaños, mantiene 869.934 votos.

El 10-N el bloque reaccionario perdió casi 900.000 votos, mientras que PSOE, Unidas Podemos, Más País, ERC, EH Bildu, CUP, BNG y otras pequeñas formaciones aunque sobrepasan a la derecha claramente, también caen: se quedan en 12.141.507 votos, 49,3% y 179 escaños. En abril, su resultado conjunto fue de 13.239.980 votos, un 50,8% y 185 diputados. Obviamente en esta pérdida global el partido que más retrocede con diferencia es el PSOE (casi 800.000).

Aunque Unidas Podemos ha obtenido peores datos también, paradójicamente ha logrado su objetivo de torcer

el brazo a Sánchez. Pero no ver las cosas tal como son es un error que se paga caro en política.

El 10-N la coalición formada por Podemos e IU obtuvo 3.097.185 votos, lo que significa un retroceso de 635.744 respecto a abril (cuando consiguió 3.732.929) y de 1.952.549 desde las elecciones de junio de 2016 (en aquel momento alcanzó 5.049.734 papeletas). En diputados significa pasar de los 71 obtenidos el 26 de junio de 2016, a 42 en abril de 2019 y 35 este 10-N. En definitiva, pierde más del 50% de sus diputados y casi el 40% de sus votos en estos tres años.

Si en 2016 el *sorpasso* estaba al alcance de la mano, con un PSOE que sacaba a Podemos menos de 375.000 votos, tras el 10-N la diferencia ha pasado a ser de más de 3.600.000 votos a favor del partido de Sánchez, que duplica los votos de Iglesias y obtiene casi 16 puntos de distancia (28,6% para el PSOE y un 12,8% para Unidas Podemos).

Los datos en los diferentes territorios son significativos. En Catalunya fueron la primera fuerza en las elecciones de 2016, con 848.526 votos, 12 escaños y un 24,5%. En este 10-N mantienen los 7 diputados de abril, pero pasan de 614.738 votos a 546.733. En la Comunidad Autónoma Vasca pasan de ser la primera fuerza



Gobierno PSOE-Unidas Podemos



en 2016 con 333.730 votos, el 29% y 6 escaños, a ser la cuarta con 181.337, el 15,4% y 3 diputados. En Andalucía obtienen 6 diputados, es decir, pierden 3 de los 9 que tenían, y retroceden de 651.160 votos en abril a 555.902 en noviembre.

Para matizar esta caída se puede argumentar que Más País de Errejón y Compromís logran 554.066 votos de los 635.744 que pierde UP, pero los más de 800.000 votos que se deja Sánchez van directamente a la abstención y no a UP.

Obviamente Unidas Podemos mantiene un suelo electoral nada despreciable, pero la dirección ha renunciado a la menor autocritica. Si los mismos errores que se han cometido estos años se repiten como partido de Gobierno, las consecuencias serán muchísimo más graves.

Muchos dirigentes de Unidas Podemos se declaran republicanos, anticapitalistas y, no pocos, comunistas. Pero en la práctica han jugado el penoso papel de blanquear el “orden institucional” que niega el derecho a decidir y castiga con la represión y la cárcel a un pueblo que lucha por la república. La oportunidad que han desaprovechado para unificar este movimiento extraordinario con las demandas de la clase obrera y la juventud del resto del Estado es evidente.

Su acusación de que el movimiento de liberación nacional en Catalunya hace el juego a las élites es completamente absurda. Los cientos de miles de trabajadores y jóvenes que llenan las calles de Catalunya en movilizaciones multitudinarias, no quieren una república de recortes y austeridad. Al contrario. Han dejado más que claro su rechazo a la oligarquía catalana que, por cierto, está fundida con la española combatiendo este movimiento.

Lo verdaderamente increíble es que Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau pretendan establecer una equidistan-

cia imposible entre un pueblo que lucha y quienes lo reprimen. Han errado en su análisis de la cuestión nacional, igual que cuando renuncian a un programa de ruptura con el capitalismo y abandonan las reivindicaciones más clasistas y avanzadas con las que Podemos irrumpió hace cinco años.

O con los capitalistas o con los trabajadores

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos todavía necesita de concretarse y lograr los apoyos parlamentarios que garanticen la investidura de Sánchez. Pero todo parece indicar que no tendrán dificultades insalvables para sumar los diputados de Más País, PNV, BNG, Teruel Existe y PRC y, posteriormente, en convencer a algunos de ERC o EH Bildu para que se abstengan en la segunda votación.

Tampoco parece que esta vez el objetivo de Unidas Podemos de hacerse con ministerios de corte social, incluida una vicepresidencia para Pablo Iglesias esté en peligro. La cuestión de fondo es para qué van a servir esos ministerios en un Gobierno pilotado por un PSOE y un Pedro Sánchez que se han mostrado firmes defensores del orden monárquico del 78, y plenamente dispuestos a aplicar las medidas que los grandes poderes económicos y la UE les han exigido.

Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón deberían reflexionar seriamente sobre la experiencia de Syriza en Grecia. La formación de Tsipras llegó al poder aupada por un apoyo entusiasta de la clase obrera y la juventud, en medio de una movilización de masas contra los planes de ajustes salvajes y recortes draconianos de la Troika (FMI, BM, UE). Pero Tsipras dio la espalda a este entusiasmo, y renunció a confrontar con los capitalistas griegos y europeos. Finalmente, des-

pués de un referéndum en el que el voto masivo contra la Troika demostró las condiciones tan favorables que existían para romper con los recortes y la austeridad y tomar el control de la economía mediante la nacionalización de los sectores estratégicos, Tsipras capituló vergonzosamente, traicionó a su base social y, finalmente, asfaltó el camino para que la derecha recuperase el Gobierno.

Los dirigentes de Unidas Podemos se engañan si piensan que sus “habilidades” en el Consejo de Ministros van a convencer al Ibx 35 de que mitigue sus ataques contra los trabajadores, los jóvenes y los sectores más desfavorecidos. El gran capital, junto a los jefes de la UE, y muchos dirigentes socialistas que ahora se muestran como “aliados”, los someterán a una presión despiadada desde el minuto cero. Cuando se den esas circunstancias ¿cómo responderán?

El documento presentado como base de este Gobierno sólo contiene declaraciones generales de tono “progresista”. Nada se habla de derogar la contrarreforma laboral, la de las pensiones, la LOMCE o la Ley Mordaza, ni de acabar con los recortes sangrantes en la enseñanza y la sanidad públicas. Ninguna declaración sobre poner fin a los desahucios, y garantizar la vivienda pública y accesible con alquileres sociales. Tampoco hay referencias a medidas concretas para luchar contra los EREs, para renacionalizar las empresas privatizadas o remunicipalizar los servicios públicos defendiendo el empleo digno y de calidad. Tampoco hay la más mínima mención a cómo enfrentar la dictadura de las eléctricas, o cómo lograr que la banca devuelva los 60.000 millones que robó del rescate financiero, y que ha sido una medida estrella del programa electoral de Unidas Podemos.

Las dos únicas cuestiones que se concretan con claridad son el control del gasto público para respetar el equilibrio fis-

cal con Europa y que se “fomentará el diálogo en Catalunya siempre dentro de la Constitución”, es decir, que tal como Iglesias ya señaló hace meses, Unidas Podemos respaldará al PSOE en su política contra el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, incluido el recurso al 155 y la represión.

No hay duda de que la derecha no dará tregua a este Gobierno. Ya lo han anunciado los portavoces del PP, de Vox y de Cs, aunque estos últimos en un gesto desesperado han apelado a un Gobierno de unidad nacional entre el bloque reaccionario y el PSOE.

A la hora de escribir estas líneas es imposible determinar el programa del nuevo Gobierno en sus detalles y cómo se desarrollarán las negociaciones de cara a la investidura. Pero una cosa está clara. No se podrá gobernar para dos amos: o con los capitalistas, con la banca, con los grandes poderes fácticos, que son el sostén del régimen del 78, o con los trabajadores y sus familias, con los parados, con la juventud que sufre la lacra de la precariedad y el desempleo crónico, con los pensionistas, con el pueblo de Catalunya que lucha por la república y su derecho legítimo a decidir, con las mujeres golpeadas por la desigualdad y la violencia, con todos los oprimidos y explotados.

Este Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha sido posible por la voluntad de millones de trabajadores y de jóvenes que quieren un cambio radical en sus condiciones de vida. Pero no hay ninguna garantía de que esto se logre si la lógica implacable del capitalismo es respetada sumisamente.

Como marxistas revolucionarios somos ajenos al sectarismo pero no cerramos los ojos ante la realidad. Las lecciones de la historia deben tenerse muy en cuenta. Tanto en junio de 1931, cuando se constituyó el Gobierno de conjunción republicano socialista, como en octubre de 1982, con el encabezado por Felipe González, la clase obrera demostró una enorme determinación para transformar la sociedad. Pero sus dirigentes no fueron capaces de disputar el poder a la oligarquía, a los terratenientes, a los banqueros y la Iglesia, y sus tímidas reformas pronto se transformaron en contrarreformas que allanaron el camino a la reacción.

Debemos confiar en nuestras propias fuerzas y entender que cualquier avance será fruto de la organización y la lucha masiva. Si queremos combatir a la extrema derecha, si queremos romper definitivamente con la austeridad y los recortes, necesitamos construir un partido de los trabajadores armado con el programa del marxismo y que plantee sin complejos la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Esa es la tarea más importante de esta época histórica.

**iÚnete a
Izquierda Revolucionaria!**

**IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA**

Afiliate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 952 276 563 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 945 231 202 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZIA: A Coruña 678 420 888 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 679 500 266 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIÀ: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • @IzquierdaRevol

► VIENE DE LA CONTRAPORTADA

La toma del aeropuerto de El Prat, las imponentes Marxes per la Llibertat organizadas por ANC, la huelga estudiantil de 72 horas convocada por el Sindicat d'Estudiants —con más de 200.000 jóvenes tomando masiva y pacíficamente las calles—, la huelga general del 18-O convocada por Intersindical-CSC e IAC que paralizó Catalunya con más de dos millones de personas en las manifestaciones, la movilización por la amnistía del 26 de octubre en la que participaron un millón de personas en Barcelona, y las decenas de acciones multitudinarias que se han venido desarrollando desde el día que se conoció la sentencia hasta el momento de escribir este artículo, dan cuenta de la envergadura histórica de este levantamiento.

Todas estas movilizaciones traen a la memoria las grandes luchas revolucionarias y antifascistas protagonizadas por la clase obrera catalana y del resto del Estado en los años 30 o 70 del siglo pasado. Eso es lo que quiere ocultar la burguesía catalana y española con sus mentiras y las imágenes de violencia que ellos mismos provocan mediante las cargas brutales de la policía nacional y los Mossos d'Esquadra y la acción de infiltrados.

Tan solo el éxito de la huelga general del 18-O demuestra que existen las condiciones para movilizar a la poderosa clase obrera catalana con un programa que unifique la lucha contra la represión y por la república con las reivindicaciones sociales y de clase. La huelga fue masiva en la enseñanza pública, administración y transporte de viajeros (Metro, Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat, autobuses), así como entre los bomberos y en el puerto de Barcelona, donde los estibadores salieron en columna hacia la manifestación. El comercio cerró en un 60-80%, según el Departament de Treball. Las calles más importantes de las ciudades apenas tuvieron circulación y la patronal PIMEC tuvo que reconocer que paró el 30% de empresas industriales y un 68% de los trabajadores, y en los servicios un 40% de negocios con el 83,8% de los trabajadores secundando la huelga. Estos datos son aún más relevantes considerando que las direcciones de UGT y CCOO se opusieron a la convocatoria.

Y tras esta demostración de fuerza de la clase obrera y la

Catalunya

¡El pueblo en lucha derrota a la derecha españolista!

juventud todavía tenemos que escuchar a intelectuales que se dicen “progresistas”, o a los dirigentes reformistas de la izquierda estatal, hablando de movimiento de las “élites catalanas”. ¡Qué forma tan patética de ocultar su claudicación ante el régimen del 78! En lugar de combatir seriamente la campaña de represión, calumnias y catalanofobia, estos dirigentes que llegaron denunciando a “la casta” y combatiendo al régimen del 78, se lavan las manos sermoneándonos para que acatemos la sentencia del Supremo y renunciemos a la república.

Con la economía mundial entrando en recesión, la burguesía española y catalana preparan nuevos recortes y ataques, y tienen pánico a que el ejemplo de lucha en Catalunya pueda extenderse al resto del estado. Por eso intentan introducir la máxima confusión y división posible dentro de la clase obrera catalana y entre esta y la del resto del Estado, agitando la “unidad de la patria” y todo tipo de prejuicios españolistas y calumnias.

Para dar mayor credibilidad a esta campaña han recurrido a Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE. En lugar de escuchar a todo un pueblo que reclama su derecho legítimo a decidir, han decidido involucrarse en la bandera rojigualda para disimular su sometimiento al Ibx 35 y aliarse a los sectores más franquistas del aparato del Estado.

Sánchez ha amenazado con un nuevo 155, anunciado que incluirá como delito en el Código Penal la organización de referéndums no autorizados por el estado (que eliminó Zapatero y exigían recuperar PP, Vox y Cs) y apoyado la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar las webs de Tsunami Democràtic tachándolas de “terrorismo”... Una agresión frontal a la liber-

dad de expresión que mañana será empleada contra cualquier colectivo que el sistema considere una amenaza.

Agitando el españolismo más reaccionario y mintiendo sobre lo que pasa en Catalunya, los dirigentes del PSOE han dado alas al PP y a Vox. Pero el avance de la ultraderecha, la ofensiva represiva contra los derechos democráticos y los recortes que prepara la burguesía provocarán una explosión de la lucha de clases, en Catalunya y en el resto del Estado.

Construir una izquierda combativa para conquistar una república catalana socialista

Todos los acontecimientos del último mes en Catalunya señalan que la crisis revolucionaria abierta hace dos años, cuando millones de personas decidimos romper con el régimen del 78 votando por la república, no solo sigue abierta sino que está agudizándose.

Dentro del movimiento de liberación nacional de Catalunya existe un choque creciente entre amplios sectores de la población que queremos llevar hasta el final la lucha por una república catalana de los trabajadores y el pueblo, y el programa de la derecha catalanista que tiene un peso decisivo en el Govern, y también los dirigentes de ERC, que buscan un acuerdo con el Estado y el Gobierno del PSOE para vaciar las calles y hacer la misma política de siempre. Esta contradicción se ha hecho más evidente que nunca con la represión de los mossos, el clamor en las calles exigiendo la destitución del consejero d'Interior Buch, y el rechazo público en las manifestaciones a las políticas de recortes del Govern de JxCat y ERC.

Hay que sacar las lecciones de la experiencia de los últimos años. La izquier-

da política y sindical combativa, y los movimientos sociales que hemos dado cuerpo a este movimiento de masas, debemos levantar un plan de acción prolongado en el tiempo, con un calendario claro de nuevas huelgas generales, asambleas en los centros de trabajo, repartos masivos de propaganda y comités de acción que genere el apoyo masivo de la población. Esta es una responsabilidad en primer lugar de la CUP, que ha cosechado un apoyo especialmente importante entre la juventud.

Un movimiento de resistencia de esta envergadura exige dejar claro que luchamos por una república socialista en beneficio de los explotados y los excluidos, no para que continúe en el poder la oligarquía económica de siempre, aunque se envuelva con la estelada. Una república que nacionalice las palancas fundamentales de la economía, la banca y los grandes monopolios y acabe con la pesadilla de los recortes, la falta de vivienda pública y asequible, la precariedad y salarios miserables, la violencia patriarcal y la destrucción del medio ambiente. Así también convenceremos a los trabajadores y la juventud del resto del Estado, y a muchos otros en Catalunya, de que esta república es también la suya.

Las bases exigen una estrategia clara para enfrentar la represión del Estado franquista y hacer realidad la república. El factor fundamental que lo impide es el peso decisivo que siguen teniendo en la dirección del movimiento los sectores que aceptan el capitalismo como único sistema posible y rechazan unir la liberación nacional a la transformación socialista de la sociedad. Para superar este obstáculo no basta con la voluntad de luchar, hay que actuar conscientemente para construir un partido de los trabajadores y la juventud que levante este programa revolucionario e internacionalista.



La **juventud** en primera línea de la lucha



Sindicat d'Estudiants Catalunya

En las últimas semanas millones en Catalunya hemos protagonizado un verdadero levantamiento popular contra el régimen del 78 heredado de la dictadura franquista. Y sin lugar a dudas, la juventud ha jugado un papel de primera magnitud en los acontecimientos, contagiando con su empuje y frescura al conjunto del movimiento de liberación nacional. Nosotros, que no vemos un futuro digno, que sufrimos los recortes, el paro y la precariedad más absoluta, que nos han golpeado violentamente por querer decidir, que queremos acabar con este sistema injusto, hemos estado en primera línea de la lucha.

Respuesta inmediata: decenas de miles de jóvenes en las calles

Desde el Sindicat d'Estudiants pusimos un plan de lucha sobre la mesa: el día que salga la sentencia paramos las clases y esa misma semana 72 horas de huelga general. Y emplazamos a los dirigentes de ANC, Òmnium, la Intersindical-CSC e IAC a abandonar las declaraciones genéricas y a preparar y anunciar la respuesta de forma clara y organizada. Decenas de miles de hojas y carteles y centenares de asambleas llenaron los centros de estudio de toda Catalunya durante días y el 14 de octubre, justo después de conocerse el dictamen, decenas de miles de estudiantes confluimos en Plaça Catalunya de Barcelona en un estallido de rabia y lucha formidable, abarrotando la plaza y las calles aledañas y llamando a la huelga general. Los jóvenes gritábamos con fuerza lo que sentía todo un pueblo, y junto con miles de trabajadores ocupábamos exitosamente el Aeroport de El Prat y centenares de plazas durante todo el día, presionando a las direcciones de la

Intersindical-CSC e IAC para anunciar oficialmente la convocatoria de la huelga general el 18 de octubre. Al día siguiente por la mañana la convocatoria de esa huelga era un hecho.

Los estudiantes respondemos a la campaña de criminalización

La capacidad de la juventud de contagiar la lucha contra el régimen del 78, dentro y fuera de Catalunya, es la explicación de la brutal campaña de criminalización desatada contra nosotros. Orquestada por los capitalistas y su Estado, con Sánchez y Marlaska como portavoces, y utilizada también por el Govern, esta campaña llenaba día y noche los telediarios para justificar la represión salvaje con la que Policía Nacional y Mossos d'Esquadra reprimían a miles de manifestantes pacíficos para intentar frenar la lucha de tan poderoso movimiento y evitar que el apoyo siguiese aumentando. A pesar de que no hubo un solo día desde el anuncio de la sentencia en que las protestas masivas y pacíficas no culminaran con una represión salvaje, el conjunto del movimiento no cayó en provocaciones y se continuó movilizándose de forma masiva y pacífica.

Tras los exitosos y multitudinarios piquetes informativos del miércoles 16-O, primer día de huelga estudiantil, más de 200.000 estudiantes llenamos las calles de Barcelona y diversas localidades en las manifestaciones convocadas por el Sindicat d'Estudiants el jueves 17, ¡y otros 200.000 más al día siguiente, iniciando una jornada de huelga general histórica que movilizaría a millones! Cuando cientos de periodistas, mossos y nacionales delante de la Jefatura de Policía en Barcelona aguardaban con cascos y cámaras la foto perfecta para su campaña, los gritos de “Som estudiants, no criminals!”,



“Fora infiltrats de les nostres manis!” y “Som gent de pau!” retumbaban en la Vía Laietana haciendo imposible su estrategia. ¡Así se combate la represión, con la lucha de masas! Esta escena se repetiría más adelante en muchas protestas donde los propios manifestantes organizaban cordones de seguridad para aislar a los provocadores y a los infiltrados que querían reventarlas.

Luchamos por la república de los trabajadores y la juventud ¡y necesitamos un plan de lucha para conquistarla!

El Sindicat d'Estudiants propuso a los dirigentes de ANC, Òmnium, la Intersindical-CSC e IAC continuar la lucha con un plan de movilización ascendente, que comenzara por una nueva huelga general de 48 horas. A pesar de su negativa, el SE sí llevó sus palabras combativas a los hechos convocando otra huelga ge-

neral estudiantil para los días 30 y 31 de octubre, donde miles de jóvenes salimos de nuevo a las calles.

La juventud ha jugado un papel muy importante y es un orgullo para nosotros haber inspirado a otros no tan jóvenes y de los cuales tanto tenemos que aprender. Pero somos muy conscientes que esta lucha no es juvenil, requiere de la unión de quienes podemos realmente transformar la sociedad, de quienes hacemos funcionar la economía cada día: la clase trabajadora y la juventud. ¡Hemos demostrado que tenemos fuerza para vencer al régimen del 78! ¡Continuemos la lucha contra la represión del Estado y la oligarquía catalana! ¡Por la República catalana socialista!





Alba Moreno
Izquierda Revolucionaria /
Libres y Combativas · Sevilla

El 31 de octubre la Audiencia de Barcelona emitió la sentencia del juicio a la Manada de Manresa, dejando de nuevo al descubierto el ADN machista y reaccionario de las instituciones judiciales.

La “justicia” vuelve a considerar que no es violación sino abuso que seis hombres penetraran por turnos de 15 minutos a una menor intoxicada por el alcohol. Las razones expuestas para considerarlo “abuso sexual” y no “agresión” es que la joven “se encontraba en estado de inconsciencia (...) sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación”.

La Audiencia considera que no hay ningún tipo de intimidación en una violación grupal a una joven de 14 años; es decir, que en el fondo está permitido violarnos y agredirnos si estamos bajo los efectos del alcohol y las drogas porque “no nos podemos resistir lo suficiente”. Una auténtica radiografía del machismo imperante en las instituciones burguesas.

Otro de los aspectos de la sentencia que más indignación ha generado ha sido la absolución a dos de los miembros: uno de los seis que participó en la violación múltiple y un séptimo que observaba cómo penetraban a la joven mientras se masturbaba. La sala absuelve a este último alegando que “no podría haber hecho nada efectivo para evitar los delitos”. Escalofriante.



La justicia machista ampara a la Manada de Manresa

**10 años de cárcel por violar,
13 por organizar un referéndum**

Esta nueva sentencia vuelve a evidenciar que *las manadas son el sistema*. Detrás de todas las resoluciones judiciales machistas no hay solo un puñado de jueces carentes de una apropiada “formación de género”, sino todo un entramado institucional y judicial que no fue depurado tras la dictadura franquista y que sigue golpeando al conjunto de las oprimidas y oprimidos. Una justicia que absuelve o pone penas ridículas a maltratadores

y violadores (10 años para los condenados de Manresa) pero persigue con furia a las y los que luchamos para cambiar este sistema criminal.

La judicatura tiene mucha cautela en utilizar palabras como “violación” pero no le tiembla el pulso para declarar “terroristas” a los jóvenes de Altsasu o al movimiento independentista catalán por organizar un referéndum. Para los defensores de este sistema esto es “justo y democrático”. ¡Qué vergüenza!

Consignas como “yo sí te creo” han vuelto a resonar en decenas de ciudades

de todo el Estado. Demostramos nuestra determinación para acabar con un sistema judicial patriarcal, franquista y clausista y con este sistema miserable. Fue gracias a la movilización que conseguimos que los violadores de Pamplona fueran condenados por violación.

Exigimos la expulsión inmediata de los y las machistas de la judicatura y un castigo ejemplar a los violadores. La única forma de acabar con la violencia machista es a través de la organización y la lucha masiva en las calles. Tenemos la fuerza para conseguirlo. Esta lucha la vamos a ganar.

Cumbre del Clima en Madrid

Una mascarada de los capitalistas mientras siguen destruyendo el planeta



Sindicato de
Estudiantes

Del 2 al 13 de diciembre se celebrará en Madrid la Cumbre Mundial sobre el Clima 2019 de las Naciones Unidas, más conocida como COP25. Esto se ha concretado tras la decisión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de cancelar esta cita en el país latinoamericano por la impresionante rebelión social que los jóvenes y trabajadores chilenos están protagonizando en las calles contra su Gobierno.

El Ejecutivo del PSOE e incluso el PP, a través de Díaz Ayuso y Martínez-Almeida, presidenta y alcalde de Madrid, han celebrado con entusiasmo acoger la cumbre climática porque “así se podrá demostrar al mundo todo lo que España hace en materia de medioambiente”. Nada más lejos de la realidad. Con esta cumbre, los culpables de la barbarie ecológica, la clase dominante, empresarios y políticos, intentarán lavarse la cara para eludir sus responsabilidades directas en la crisis medioambiental más grave de la historia del planeta.

**¡Vuestras cumbres
son una mentira!**

En este evento participarán los líderes políticos de los 197 países miembros del Pacto del Clima junto a muchos otros de distintos países de la Unión Europea. Pre-



cisamente estos gobiernos capitalistas intentan presentar los protocolos medioambientales y las cumbres climáticas como pasos adelante y como una forma de controlar la actividad nociva de las empresas y multinacionales. Pero la realidad es que los protocolos de Río, Kioto o París no han servido para nada. Al contrario. Utilizando la celebración de estas cumbres, la clase capitalista ha convertido el fenómeno del cambio climático en una fuente de negocio y especulación muy rentable.

Todas las “medidas adoptadas” sobre el papel no han frenado ni un milímetro el avance de la destrucción del planeta sino que han llenado los bolsillos de quienes

dirigen los consejos de administración de las empresas que provocan la mayor parte de las emisiones de CO₂: ayudas a “empresas” verdes, exportación de la contaminación a países en vías de desarrollo (donde la normativa ambiental es inexistente), “futuros climáticos” (valores especulativos con los que poder especular en bolsa) y un largo etcétera.

**Por un ecologismo anticapitalista.
¡Necesitamos una revolución!**

Esta cumbre climática está siendo utilizada por el PSOE para presentarse como firmes defensores de políticas verdes. En

esta línea han ido todas sus declaraciones sobre poner en marcha una “agenda de transición ecológica” o incluso su “apoyo” a la huelga de la juventud del 27-S. Sin embargo, Pedro Sánchez no solo no ha confrontado con los grandes poderes económicos para luchar contra el cambio climático, sino que se ha subordinado a ellos: a los especuladores inmobiliarios responsables de los efectos destructivos de la gota fría, a los empresarios hoteleros que destruyen nuestras costas y a las multinacionales que envenenan nuestro aire.

La defensa de un capitalismo más “justo y verde” es una utopía. Desde los grandes poderes económicos y políticos se alienta este tipo de consignas en su propio beneficio, utilizando la convocatoria de las cumbres climáticas para intentar descarrilar la lucha contra el cambio climático de las calles hacia las instituciones de la burguesía y así poder seguir aplicando las mismas políticas que han generado esta situación.

La única forma de frenar la barbarie ecológica es impulsando un movimiento anticapitalista en las calles. Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a la movilización el 6 de diciembre a las 18h. en Atocha para denunciar la celebración de esta cumbre y la dictadura que los grandes monopolios ejercen sobre la producción mundial. ¡El capitalismo mata el planeta!



¡En defensa de un transporte público de calidad!

Huelga en la EMT de Madrid



Sindicalistas de Izquierda Madrid

El 24 de octubre, los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid decidieron ir a la huelga para exigir la contratación de nuevos conductores de autobús y para evitar que el Ayuntamiento externalice servicios. En una asamblea masiva, con más de 2.000 trabajadores, convocaron paros de dos horas los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre y una huelga de 24 horas el 3 de diciembre.

El proceso de degradación del servicio de autobuses urbanos y de las condiciones laborales ha alcanzado un punto crítico. Los sindicatos denuncian que diariamente entre 50 y 100 vehículos no salen de cabecera por distintas incidencias, lo que repercute en el incremento de los tiempos de espera y en la masificación de los autobuses en ruta.

Los trabajadores han dicho basta. El detonante ha sido la decisión del actual Gobierno de la derecha (PP y Ciudadanos, apoyados por Vox) de paralizar la

contratación de 85 conductores aprobada por el anterior Ayuntamiento. Ahora, la plantilla exige la contratación inmediata de 200 conductores y entre 400 y 500 más en 2020.

Además, el actual Gobierno municipal pretende privatizar el servicio de bicicletas (Bicimad) y el teleférico, ambos gestionados por la EMT. En el caso de Bicimad utilizando la clásica estrategia de empeorar el servicio —desde junio se han reducido significativamente las bicicletas en servicio— para presentar la ges-

tión pública como ineficaz y así despejar el terreno para su privatización.

La lucha es el único camino

Como muy bien saben los trabajadores de la EMT, la lucha es el único camino. Ya en 2004, el Ayuntamiento del PP intentó privatizar el servicio de avituallamiento de los talleres de la EMT de Fuenarral y fue la movilización lo que desbarató sus planes.

El delegado de Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, se ha negado a hablar con los trabajadores mientras la convocatoria de huelga siga encima de la mesa. El siguiente paso será intentar poner a la “opinión pública” en contra, y utilizarán los medios de comunicación para criminalizar la huelga.

Es necesario que el comité de huelga contrarreste y se anticipe a esta campaña con un minucioso y amplio plan dirigido a los usuarios del transporte público, explicando las razones de la huelga. Es fundamental organizar repartos masivos de propaganda en los puntos neurálgicos de la red de transporte, realizar asambleas, coordinarse con las asociaciones vecinales y sociales para llegar a los barrios...

Es importante dar a la huelga la perspectiva de una lucha global por mejorar toda la red del transporte público de la Comunidad de Madrid (CAM). El Metro de Madrid, dependiente de la CAM, y los trenes de cercanías, dependientes del Ministerio de Fomento, han sufrido también un fuerte deterioro. Por ejemplo, la red de Metro ha pasado de tener 2.369 trenes en 2010 a 2.322 en 2018, y actualmente hay casi un 9% menos de maquinistas que en 2016.

Las condiciones para unificar la lucha de los trabajadores de la EMT, Metro, Cercanías y de todo el transporte público de la CAM están dadas. Este es el mejor camino para alcanzar una victoria.

25 de noviembre: juicio por la readmisión de Carlos Naranjo

¡Basta de represión sindical en Ford-Valencia!

El 25 de noviembre tendrá lugar el juicio por el despido fraudulento y antisindical del compañero Carlos Naranjo por parte de la multinacional Ford. El 17 de julio el juicio se aplazó porque uno de los testigos citados para la defensa del compañero no recibió la notificación del juzgado.

Para el juicio del 17 de julio realizamos una campaña de solidaridad estatal e internacional, repartimos miles de hojas informativas en Ford y en el polígono donde se encuentra toda la industria auxiliar, consiguiendo que el caso fuese muy conocido. Se enviaron al juzgado más de 500 firmas reclamando la nulidad del despido y organizamos una concentración de apoyo de 150 personas con mucha fuerza y combatividad.

Desde Izquierda Revolucionaria junto a la sección sindical STM-Ford nos movilizaremos nuevamente.

Desindustrialización salvaje en Asturias

Frente al chantaje patronal, nacionalización



Alejandro Fernández
Izquierda Revolucionaria / CGT Asturias

Si en agosto Alcoa vendía su factoría de Avilés al fondo de inversión suizo Parter Capital con la consiguiente destrucción de empleo, en octubre Arcelor, motor de la industria asturiana, aplicaba —en plena negociación del convenio— un ERTE sobre 1.700 trabajadores.

La multinacional Vesuvius es una más de las empresas que llegaron a las cuencas atraídas por las subvenciones de los fondos mineros: Venturo XXI, Diasa Pharma, Kerkus Metals, Ascmon, Autotex, Alas Aluminium... Se beneficiaron del dinero público y a los pocos años echaron el cierre. Este fue el método ideado por los gobiernos de PP y PSOE, con la colaboración de las direcciones de CCOO y UGT, para comprar la paz social mientras se cerraban los pozos.

El 12 de septiembre Vesuvius presentaba un ERE para toda la plantilla

justificándolo por la crisis del sector. Argumento inaceptable viniendo de una empresa que ha recibido suculentas ayudas públicas, y cuyas ventas y beneficios están en pleno auge. La verdadera razón reside en la lógica del sistema capitalista: deslocalizar la producción hacia zonas con salarios más bajos para así incrementar la cuenta de resultados.

El fracaso de la política del “mal menor”

Finalmente, a mediados de octubre la Federación de Industria de CCOO Asturias anunciaba la aceptación por parte de la plantilla de la oferta de la empresa: cierre de las dos plantas y despido de toda la plantilla, 128 trabajadores. Solo continuarán 19 personas en labores comerciales a la espera de que se constituya una “mesa técnica” en la que empresa, CCOO y Gobierno del Principado (PSOE) planteen una nueva actividad industrial.

La dirección de CCOO ofrece a la plantilla la aceptación de este desastroso acuerdo sin haber convocado una sola jornada de huelga general en la comarca y sin haber recurrido al enorme potencial de movilización de toda una región.

Con Vesuvius, Alcoa o Arcelor vemos repetida la misma estrategia sindical que nos ha llevado al desastre durante años: súplicas al Gobierno de turno para buscar otro inversor, que se den más subvenciones al empresario...

La clase obrera necesita un sindicalismo combativo que rechace categóricamente el supuesto “derecho” de los capitalistas a cerrar empresas y reivindique su nacionalización bajo control de los trabajadores. Hay que preparar una huelga general en las comarcas afectadas por los cierres y despidos, y tiene que ser el punto de partida para la convocatoria de una gran huelga general en Asturias para combatir la desertización industrial y en defensa de nuestro futuro.

La precariedad mata en Navantia-San Fernando

¡Organicemos la lucha por unas condiciones laborales dignas!



Antonio Muñoz
Izquierda Revolucionaria /
Delegado sindical en
Ditecsa, empresa auxiliar
de Navantia-Puerto Real

En la mañana del 17 de octubre murió con 39 años de edad Andrés Vías, trabajador de la empresa auxiliar Arsenales Técnico Dimensionales del Trocadero SL, mientras realizaba sus tareas en el astillero de Navantia en San Fernando.

Los trabajadores sabemos que la causa última de esta nueva muerte en el tajo es la política criminal de los empresarios, que deciden ahorrar costes y aumentar sus beneficios a costa de las condiciones de seguridad de los trabajadores y que dejan en nada todos los protocolos sobre seguridad que aceptan sobre el papel.

Navantia paralizada en San Fernando y en Puerto Real

Nada más conocerse la trágica noticia, los trabajadores de Navantia en San Fernando y en Puerto Real, tanto de la principal como de las auxiliares, decidieron en asamblea parar la actividad hasta el lunes 21 de octubre en solidaridad con el compañero fallecido y su familia.



En el caso del astillero de Cádiz, el comité de empresa —formado por UGT, CCOO y el Colectivo Autónomo de Trabajadores— se limitó a organizar un minuto de silencio y colocar la bandera a media asta, para seguidamente continuar con la actividad laboral normal.

Al conocer esta vergonzosa actitud por parte del comité de empresa, un grupo de trabajadores de San Fernando y Puerto Real, entre ellos los compañeros de Sindicalistas de Izquierda, coordina-

dos en el grupo *El metal en lucha*, decidimos tomar la iniciativa y convocar para el viernes 18 de octubre una asamblea a primera hora de la mañana a la entrada del astillero gaditano.

A las 5:30 horas de la mañana, unos 25 compañeros de San Fernando y Puerto Real acudimos al astillero de Cádiz. Con la clamorosa ausencia del comité de empresa de la principal, unos 500 obreros —la práctica totalidad de la plantilla de la auxiliar y algunos de la princi-

pal— votaron por unanimidad sumarse al cese de la actividad en señal de luto hasta el día 21.

Contra la subcontratación y la precariedad, la lucha es el único camino

Esta tragedia no es nueva en los astilleros de la Bahía; el 18 de mayo de 2018 José Daniel y José Luis, trabajadores de la auxiliar Equimansur en Puerto Real, murieron aplastados por una plancha de acero. Miles de obreros, reunidos en asambleas, decidimos convocar una huelga general en el metal en la Bahía. El 13 de junio de ese año, el sector quedó paralizado en una huelga que fue un grandísimo éxito y una auténtica conmoción social, a pesar de que contó con una actitud hostil y esquirola por parte de las direcciones de CCOO y UGT.

Es necesario organizar una nueva huelga general del metal en la Bahía de Cádiz que exija el fin de la precariedad y unas condiciones de trabajo dignas. Para ello, el objetivo tiene que ser acabar con la subcontratación, exigiendo una Navantia 100% pública.

Los sindicatos que componen la confluencia sindical deben aportar su energía y estructura para que la huelga sea una realidad. Comunicados como el del SAT, señalando que comparten la idea de promover la huelga general, se quedan en un brindis al sol si no se pasa de las palabras a los hechos. Hay que promover rápidamente asambleas en todos los astilleros para discutir y fijar el día de la huelga. Esta es la única forma de acabar con la explotación y la precariedad que genera estas muertes.

Huelga del mantenimiento en Navantia-Ferrol

Victoria de los trabajadores



Javi Losada
Esquerda Revolucionaria /
Comité de empresa de
Navantia-Ferrol • CGT

Las factorías de Navantia en la ría de Ferrol vivieron una huelga indefinida de la industria auxiliar del mantenimiento para reivindicar la readmisión de quince trabajadores despedidos, objetivo que lograron después de casi tres semanas. Y lo lograron prácticamente solos porque, más allá de las buenas palabras, el apoyo sindical más bien brilló por su ausencia.

Los motivos reales de estos despidos fueron dos: 1) el intento de anular en la práctica el derecho de subrogación de los trabajadores del mantenimiento en empresas públicas, conquistado en el último convenio del metal provincial, firmado hace dos años; y 2) debilitar a una plantilla que está unida y es muy combativa.

La patronal no estuvo sola en esta batalla. Contó con el apoyo de la dirección de Navantia, que participó activamente en la campaña para justificar los despidos por la supuesta baja cualificación de los trabajadores, cosa totalmente falsa, como demuestra que varios de ellos pasaron a fijos esta primavera (por el plazo de los tres años) y que otro fue ascendido hace unos meses. Más grave todavía, Navantia violó el derecho a

huelga al permitir que otros trabajadores (tanto de otras compañías como de la principal) pusieran en marcha diversas grúas paradas a causa de la huelga.

Aún más solos estuvieron los trabajadores. En esas tres semanas, el comité de empresa de Navantia, aunque sacó un comunicado *formalmente* correcto, en la práctica no quiso hacer nada para apoyar *realmente* la huelga. No hizo nada ante la violación del derecho a huelga por parte de Navantia (que puso a funcionar alguna grúa puesta fuera de servicio por los delegados de Salud Laboral del propio comité), se negó a convocar una asamblea general para combatir la campaña de intoxicación contra los huelguistas iniciada por Navantia y, sobre todo, se opuso como si les fuese la vida en ello a extender la lucha al conjunto de la fábrica (y muy particularmente a la plantilla de la principal), cuestión que hubiese permitido lograr la victoria en cuestión de días, no de semanas.

Todos los despedidos fueron finalmente readmitidos. Se ganó una batalla, pero la guerra continúa. La dirección de Navantia ya manifestó que tiene la intención de dejar de subcontratar el mantenimiento, un planteamiento que en ella es totalmente deshonesto, como demuestra que a finales de septiembre ha-

ya subcontratado por dos años todo el mantenimiento de las tres factorías de la bahía de Cádiz. Lo que pretende realmente con esta maniobra no es disminuir la subcontratación, sino tener una excusa que parezca presentable para lograr el objetivo de que trabajadores del mantenimiento acaben en la calle. Quieren castigar a unos trabajadores de la industria auxiliar que se atreven a luchar, que se rebelan contra los designios de sus empresarios y de la dirección de Navantia, quieren castigar a unos trabajadores que en estos tiempos de paz social y de tanto compadreo entre algunos sindicatos y las empresas son un mal ejemplo para el resto de los trabajadores subcontratados. Desde CGT Navantia Ferrol defendemos el fin de la subcontratación, integrando a los actuales trabajadores en la principal y contratando nuevos para realizar estas tareas en condiciones dignas.

Por supuesto, durante la huelga CGT dio un apoyo total a los compañeros en lucha: informando al resto de los trabajadores mediante carteles, combatiendo las mentiras patronales, haciendo propuestas concretas de acciones, asambleas, y planteando al resto del comité extender la movilización. Y, por supuesto, se lo volveremos a dar cuando vuelvan a luchar.

Huelga general en Euskal Herria en enero

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria —en la que participan organizaciones sociales y sindicatos, entre ellos ELA y LAB— ha anunciado la convocatoria de una huelga general para la segunda quincena de enero en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Con el lema “trabajo, pensiones y vida dignas” esta huelga plantea dar un impulso a las movilizaciones ejemplares que los pensionistas están realizando desde hace casi dos años, reclamando también los derechos sociales y laborales que nos han arrebatado durante la última década.

Se trata de una gran noticia, y nace del aumento espectacular de la movilización de la clase trabajadora y la juventud. La negativa de las direcciones de UGT y CCOO a secundarla es un grave error. Deberían no solo sumarse a dicha convocatoria sino extenderla al resto del Estado, donde sería recibida con gran entusiasmo.

Desde Ezker Iraultzailea nos sumamos a esta convocatoria y contribuiremos con todas nuestras fuerzas a que sea un éxito. Es necesario darle continuidad y plantear un plan de lucha ascendente hasta conseguir las reivindicaciones.

Chile

La rebelión popular se fortalece

¡Abajo el Gobierno asesino de Piñera!

¡Por el socialismo y la democracia obrera!



Comisión Ejecutiva de
Izquierda Revolucionaria

El levantamiento del pueblo chileno iniciado a mediados de octubre ha llegado a un punto crítico. El Gobierno asesino de Piñera está contra las cuerdas gracias a la acción de las masas. Ni la salvaje represión, ni las promesas fraudulentas y las maniobras dilatorias de la oligarquía, ni la política conciliadora de la Mesa de Unidad Social han restado empuje, masividad y extensión a un movimiento insurreccional sin precedentes en los últimos treinta años.

La clase obrera y la juventud han desbordado desde el principio a los dirigentes reformistas de la izquierda, tanto del Partido Socialista (PS) como del Partido Comunista (PCCh) y la CUT, y han impuesto desde abajo cada paso adelante de la movilización, incluidas ya tres huelgas generales. Millones en las calles y una organización que se extiende a través de comités de acción, cabildos y asambleas populares, sientan las condiciones para llevar la batalla hasta la transformación socialista de Chile y terminar de una vez por todas con el capitalismo. La cuestión central está en juego: quién detenta el poder. Y la correlación de fuerzas es claramente favorable a la clase obrera y los oprimidos.

Chile vive una auténtica situación revolucionaria. Lo que comenzó como una protesta contra la subida de las tarifas del transporte público se ha transformado en un movimiento de masas: una huelga general histórica de 48 horas que paralizó el país los días 23 y 24 de octubre, seguida de marchas multitudinarias que el viernes 25 reunieron, solo en Santiago, a un millón y medio de personas.

Un movimiento que no ha cesado ni un instante y ha impulsado con un rotundo éxito otro paro nacional el 30 de octubre, y otras dos marchas masivas, especialmente la del 8 de noviembre, que volvió a reunir en la capital a un millón. Las huelgas en los distintos sectores productivos continúan y una nueva huelga general está convocada para el 12 de noviembre. La situación está tan fuera de control que al Gobierno no le ha quedado otra que suspender dos importantes eventos internacionales: el Foro Económico Asia-Pacífico y la Cumbre Mundial del Clima.

La responsabilidad de la izquierda parlamentaria

El lema “no son 30 pesos, son 30 años”, coreado masivamente en las barricadas y las manifestaciones, resume muy bien lo que está pasando en Chile. La actual ex-

plosión se ha venido incubando desde hace años, especialmente por la frustración provocada bajo los gobiernos del PS y la Concertación, y la complicidad que con ellos ha mantenido el PCCh y la CUT.

Siguiendo el modelo de la Transición española, los crímenes de la dictadura de Pinochet quedaron impunes. El aparato del Estado no fue depurado de fascistas, y las direcciones del Partido Socialista y Comunista cedieron vergonzosamente en la lucha de masas que derrotó a la dictadura, pactando con sus herederos una “transición democrática” que salvaguardara el sistema capitalista.

La dictadura de Pinochet impuso un modelo de capitalismo salvaje, siguiendo la estela de Thatcher y Reagan, privatizando todos los servicios públicos y convirtiendo Chile en un auténtico paraíso fiscal en beneficio de los multimillonarios. Posteriormente, los gobiernos “socialistas” de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet dieron continuidad a esas políticas, abriendo las puertas al nuevo Gobierno de la derecha presidido por una de las principales fortunas de Chile. Una situación que ha provocado un empobrecimiento generalizado y una desafección inevitable hacia todo el régimen político.

Lo que los partidos tradicionales de la izquierda —con sus direcciones reformistas todo el día enfangadas en los lances parlamentarios y mesas de diálogo— no han sido capaces de lograr nunca, lo ha arrancado a la clase dominante la juventud heroica y la clase obrera chilena batiéndose contra la represión y el orden capitalista.

La lucha masiva tumba el estado de excepción y acorrala al Gobierno

Desde el primer momento el Gobierno respondió al levantamiento popular con una represión salvaje, intentando cortar de cuajo las protestas mediante el terror.

Se habla oficialmente de al menos 20 muertos. Las denuncias por torturas y violaciones en comisarías se cuentan por centenares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han registrado 1.915 personas heridas, más de la mitad por disparos de los milicos y carabineros. El director de esta institución, Sergio Micco, denunciaba que las violaciones de los derechos humanos son “muy graves y reiteradas” y “que en manifestaciones donde no hay violencia, se ha disparado a mansalva a las personas”. El propio Ministerio de Justicia reconoce la detención de 9.203 personas, cientos de ellos menores de edad, solo hasta el 28 de octubre.

Sin embargo, la represión no solo ha sido incapaz de frenar la movilización de masas, sino que la ha convertido rápidamente



de los trabajadores y los oprimidos. Será papel mojado.

La única alternativa es derribar el capitalismo

La tarea del momento es profundizar y dar consistencia revolucionaria al poderoso movimiento que se ha desatado: impulsar la formación de comités de acción en todas las fábricas, centros de trabajo, de estudios, barrios..., y coordinarlos nacionalmente mediante delegados elegibles y revocables. Las bases para ello están ahí. Se han extendido los cabildos ciudadanos y las asambleas populares. Más de doscientos han agrupado a 10.000 personas el primer fin de semana de noviembre, recogiendo sus reivindicaciones e insistiendo en no abandonar las calles. Esto ha sido decisivo para que se concretara la huelga general del 12 de noviembre. Una vez más los dirigentes han sido sobrepasados por la base, solo la fuerza y la determinación de los trabajadores ha hecho posible esta nueva convocatoria.

Este es el camino, construir la huelga general indefinida —con ocupaciones de los centros de trabajo y estudio— y organizar la autodefensa de los trabajadores y la juventud, haciendo un llamamiento enérgico a los soldados para que no repriman al pueblo, organicen comités dentro de los cuarteles y paralicen las órdenes de los mandos sumándose a las movilizaciones populares. Esto tendría un efecto inmediato. La profundidad de la rebelión social ya ha tenido efectos. El soldado David Veloso, que se negó a reprimir a la población lanzando su arma al suelo y apoyó “a todo el pueblo de Chile que está peleando”. Esta valiente actitud fue seguida de declaraciones similares de los reservistas del Ejército, negándose a participar de las acciones represivas para las cuales fueron convocados.

El plan de lucha tiene que ir acompañado de un programa claro: ¡Fuera Piñera! ¡Por un Gobierno de los trabajadores en beneficio del pueblo! Nacionalización de la banca, de los monopolios y de la tierra, sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones. Educación y sanidad públicas, dignas, gratuitas y universales. Salarios dignos y empleo estable. Derecho a una vivienda pública asequible. Jubilaciones dignas cien por cien públicas. Depuración inmediata de fascistas del ejército, la policía y la judicatura: juicio y castigo a los responsables de la represión y los crímenes de la dictadura. Todos los derechos al pueblo mapuche. ¡Por la democracia obrera, abajo la democracia de los capitalistas!

El pueblo de Chile no está solo. Una nueva oleada de insurrecciones y levantamientos revolucionarios está barriendo América Latina, y tienen su réplica en Líbano, Iraq, Argelia o Sudán. Una oleada que es fruto de la miseria y la desigualdad endémica que vive desde hace décadas todo el continente. La clase obrera y la juventud chilena están reatando el nudo de la historia, poniendo otra vez de manifiesto sus tradiciones revolucionarias. Su triunfo será el triunfo de todos los trabajadores y oprimidos del mundo, abriendo el camino para la victoria del socialismo internacional.

te en una auténtica insurrección revolucionaria, y ha derrotado el toque de queda y al Estado militarizado. Finalmente, Piñera certificó esta realidad anunciando el levantamiento oficial del estado de excepción y la retirada de los militares de las calles. Una lección muy valiosa sobre los límites del Estado burgués, por más armamento con que cuente, frente a las masas que deciden ponerse en marcha y pierden el miedo.

La fuerza de las movilizaciones ha sido de tal envergadura que no solo ha replegado a los militares a sus cuarteles, el Gobierno no ha tenido más remedio que retirar la subida del transporte y proponer un “Plan Social” de mejoras en las pensiones, en el salario mínimo, en el precio de los medicamentos o en las tarifas eléctricas... incluso el congreso, dominado por partidos de la derecha, aprobó la jornada laboral de 40 horas. Piñera tuvo que pasar de señalar que “el país estaba en guerra” contra los jóvenes y los trabajadores en lucha, a pedir perdón. Estas declaraciones reflejan, en sí mismas, la auténtica correlación de fuerzas entre las clases.

Sin embargo, la burguesía jamás va a renunciar a la baza de la violencia contra el levantamiento popular. De hecho, mientras Piñera dice haber “escuchado al pueblo” la realidad es que el 7 de noviembre anunciaba la puesta en marcha de una nueva “agenda de seguridad” para endurecer la represión. Este paquete de medidas prevé fortalecer la “eficacia de las fuerzas del orden” contra las “barricadas y el entorpecimiento de la libre circulación”; dar facilidades legales para criminalizar y perseguir “desórdenes públicos”, crear un cuerpo especial de

espionaje e infiltración (“inteligencia”) para la prevención de “delitos”; incrementar la impunidad de los cuerpos represivos (“estatuto de protección para las fuerzas de orden y seguridad”), etc.

Organizar la huelga general indefinida hasta tumbar a Piñera. ¡No al Diálogo Nacional con los represores!

Todo esto no es un síntoma de fortaleza, sino de tremenda debilidad. Pero también es una advertencia muy seria: o este Gobierno es derribado por el movimiento en las calles o la clase dominante tratará, cuando la ocasión le sea más favorable, de machacarlo como sea. Por eso los llamamientos por parte de los dirigentes del PS, PCCh, de la CUT y del Frente Amplio a que este Gobierno “se siente a negociar”, dándole un barniz democrático, permitiendo que recupere la iniciativa en lugar de echarle, son completamente criminales.

La dirección de la CUT en lugar de apoyarse en la fuerza y el triunfo alcanzado por el movimiento, y dar continuidad a la lucha con un plan que incluya la huelga general indefinida hasta lograr la renuncia de Piñera, se limita a llamar a un “diálogo nacional” pidiendo al Gobierno que “devuelva la democracia al Estado de Chile”. ¿A qué Gobierno? ¿Al que ha declarado el estado de excepción? ¿Al responsable de más de 20 muertes? ¿Al que hambrea al pueblo?

En el mismo sentido, la dirección y los parlamentarios del Partido Comunista de Chile se han erigido en los campeones del pacto social, exigiendo una mesa de diálogo que incluya al Gobierno y, sobre todo, ¡que les incluya a ellos! Se quejan de que “el Gobierno ha excluido y ha marginado al mundo social y popular”. No, el Gobierno no ha excluido al pueblo, está masacrando al pueblo. Y lo que tiene que hacer quien se reivindique comunista no es buscar desesperadamente el diálogo con los represores, sino organizar la lucha para que triunfe y evitar más muertes y abusos.

Cuando las masas avanzan con paso firme, los dirigentes del PCCh se centran en poner en marcha un engorroso procedimiento de acusación constitucional contra Piñera... ¡por haber utilizado ilegalmente el estado de excepción!

La Asamblea Constituyente no acabará con el poder de la oligarquía

La consigna de una Asamblea Constituyente defendida por el PCCh y las organizaciones que forman la Mesa de Unidad Social, y que algunas organiza-

ciones que se consideran revolucionarias repiten pero añadiendo que sea “libre y soberana”, insiste en que los graves problemas de las masas se pueden resolver dentro del marco del capitalismo.

Es falso plantear que en el Chile de hoy una Asamblea Constituyente, que elabore una constitución dentro de la legalidad capitalista, pueda afrontar el problema del desempleo masivo, la precarización, la privatización de los servicios públicos o la depuración completa de fascistas del aparato estatal. Esta consigna, y sus diferentes variantes, es una renuncia vergonzosa a plantear la necesidad de luchar por el socialismo y por el poder obrero, y solo arroja arena a los ojos de los trabajadores y la juventud, desviándolos de su objetivo central.

Es muy sintomático que el Gobierno de Piñera aceptara reformar la Constitución —en una entrevista al diario chileno *El Mercurio* del 9 de noviembre afirmaba: “Los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años”— y, más significativo aún, que finalmente haya asumido incluso la propia consigna de la Asamblea Constituyente. El ministro de Interior anunciaba la noche del 10 de noviembre que el Ejecutivo “apuesta por un Congreso constituyente, una amplia participación ciudadana y un plebiscito ratificatorio”.

Situado al borde del abismo, asediado por el movimiento de masas y con un ridículo 13% de popularidad, Piñera trata así de ganar tiempo, enfriar el movimiento, dividirlo y preparar nuevas medidas represivas más selectivas contra los sectores más avanzados y organizados.

Para esa maniobra dilatoria, la actitud de los dirigentes de la Mesa de Unidad Social está siendo clave. Le permite a Piñera aparecer como un mandatario que escucha y responde al pueblo, en lugar de denunciarle y señalar que centrar las expectativas de cambio en la Constituyente implica quitar el protagonismo de la calle (el único motor real de cualquier transformación real para las masas) y devolverlo a unas instituciones burguesas debidamente maquilladas, sin que se modifique un ápice el poder real de la oligarquía, basado en el control del ejército y la propiedad privada de los medios de producción. Mientras todo el poder económico y político esté en manos de los oligarcas de siempre, ninguna constitución resolverá los problemas acuciantes

► www.izquierdarevolucionaria.net

ÚLTIMA HORA:
Abajo el golpe de Estado en Bolivia



Ecuador

¡El pueblo tumbó el 'Paquetazo'!

Balance de una lucha revolucionaria



Izquierda Revolucionaria
Internacional

Sin lugar a dudas, en Ecuador se ha vivido una insurrección popular que ha puesto contra las cuerdas al régimen de Lenín Moreno. La batalla contra la agenda neoliberal se transformó en un auténtico levantamiento revolucionario.

En marzo, el presidente ecuatoriano cerraba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de hasta 10.000 millones de dólares (¡casi un 10% del PIB del país!). Las contrapartidas no tardaron en aparecer: el 1 de octubre Moreno presentaba el *Paquetazo*, un plan salvaje de recortes sociales y medidas de austeridad, que incluía la eliminación del subsidio al precio de los carburantes hasta triplicarlos.

Las masas entran en acción

La respuesta de la población no se hizo esperar, y las protestas se extendieron rápidamente por todo el país. El contraataque del Gobierno, declarando el estado de excepción y el despliegue del ejército en las principales ciudades, encendió la mecha de la insurrección sumando y uniendo al movimiento obrero, a los campesinos pobres y las comunidades indígenas, y dando lugar a una gran huelga general el 9 de octubre. El empuje de las masas fue tal que forzó a Moreno a trasladar la sede de Gobierno de Quito a Guayaquil, mientras la capital fue ocupada durante días por decenas de miles de campesinos y trabajadores.

Junto a la retirada del subsidio a los combustibles, la reforma laboral también espoleó la furia de la población: planteaba que los contratos temporales (que afectan al 60% de la población activa) podrían renovarse con una rebaja salarial de hasta el 20%. Por su parte, los funcionarios públicos verían reducidas sus vacaciones pagadas de 30 a 15 días, y tendrían que aportar el sueldo de un día de trabajo en forma de impuesto extraordinario.

La pérdida del control por parte del estado fue extraordinariamente veloz. Lo que empezó con un paro de transportistas se transformó inmediatamente en un levantamiento generalizado por todo el

país. Se vieron persecuciones en moto a jóvenes manifestantes hasta aislarlos para poder golpearles y detenerles indiscriminadamente. Heridos por disparos de balas de goma en la cabeza y zonas vitales. Incluso el lanzamiento de dos jóvenes por un puente por parte de elementos uniformados no identificados. El saldo fue de siete muertos, alrededor de 600 heridos y más de un millar de detenidos.

Como ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el látigo de la represión no hizo más que encender la revolución. La huelga general convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), la mayor central obrera, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) paralizó el país, bloqueando no solo carreteras sino provincias enteras, y tomando la capital, Quito.

Fortaleza del movimiento y debilidad de la burguesía

Si bien Quito ha sido el escenario de movilizaciones masivas y de la ocupación de la Asamblea Nacional por parte de los manifestantes durante unas horas, en las provincias de Pastaza, Napo, Morona, Santiago y Azuay la ocupación de las sedes de Gobernación fue permanente, y hubo conatos de Asambleas Populares Autónomas en donde, según diferentes informaciones, participaron miles de personas. En otras tantas provincias, el acceso fue controlado por consejos de campesinos pobres e indígenas. La radicalización del movimiento fue tal que, en respuesta al estado de excepción, la CONAIE proclamó el suyo propio en estas regiones, llegando a frenar el avance de las fuerzas represivas e incluso a detener y desarmar a decenas de efectivos.

Por su parte, el Gobierno se mantuvo atrincherado en Guayaquil. La elección de esta ciudad, tradicionalmente conservadora, no fue casual: es la segunda en importancia y el principal puerto, cuenta con una amplia capa de pequeña burguesía blanca ligada al comercio, beneficiaria del *Paquetazo* y que mostró su disponibilidad a defender al Gobierno movilizándose en la "defensa de la paz y la libertad". No obstante, estas manifesta-

ciones fueron un fracaso absoluto, reuniendo a unos pocos cientos. Esto refleja la enorme debilidad del Ejecutivo ecuatoriano, así como el aislamiento internacional de Moreno: salvo el golpista venezolano Juan Guaidó y Pedro Sánchez, han sido muy pocas las voces en defensa del Gobierno ecuatoriano, que llegó a estar al borde del precipicio.

Una victoria incompleta: ¡la toma del poder era posible!

Ante esta situación insostenible, y tras varios días suplicando el diálogo con los dirigentes de las movilizaciones, el presidente Lenín Moreno anunció después de una breve reunión con miembros de la CONAIE la derogación del decreto 883, el famoso *Paquetazo*, aunque no hubo ninguna dimisión ni destitución en su equipo de Gobierno. Esta medida fue acompañada por una serie de promesas de inversión social. De manera inmediata, las direcciones de la CONAIE y FUT erróneamente llamaron a la desmovilización y el orden volvió a Quito tan rápido como desapareció, en medio de cierta perplejidad por parte de las masas que se levantaron y resistieron heroicamente.

Sin lugar a dudas, el paso atrás del Gobierno y el FMI es una victoria espectacular, fruto única y exclusivamente de la lucha combativa del pueblo ecuatoriano. El pánico de la burguesía a perderlo a todo ha hecho que cedan una parte. La debilidad del estado y la fuerza de las masas en acción volvieron a poner el debate del poder encima de la mesa. Mediante la vía de los hechos, las asambleas de campesinos, indígenas y trabajadores estaban demostrando, a lo largo de todo el país, que una revolución socialista no solo es factible sino que es una posibilidad realizable a día de hoy.

La guardias de campesinos e indígenas impulsieron el orden revolucionario en la ciudad frenando todo tipo de saqueos y provocaciones. Las asambleas populares detuvieron y juzgaron a agentes armados implicados en la represión, a la vez que gestionaban la distribución de alimentos y medicamentos en los campamentos distribuidos por toda la ciudad de Quito. En la práctica, aunque de

forma confusa y breve, la población dirigió una gran parte del país, superando al estado capitalista.

La dirección del FUT y de la CONAIE se limitó a exigir la retirada de las medidas de Lenín Moreno y la dimisión de algunos altos cargos implicados con la represión. Apelaron a que una delegación de la ONU interviniera para frenar la represión y que se "respetaran" los derechos humanos.

Sin embargo, la posibilidad de echar al conjunto del Gobierno fue una realidad incontestable. Pero no solo eso. Así como surgieron de manera espontánea embriones de organismos de doble poder en las provincias de mayor población indígena y campesina, la viabilidad de consolidarlos y extenderlos al movimiento obrero y coordinarlos por todo el país estaba ahí. Esta habría sido la única manera de asegurar, no solo el freno al *Paquetazo*, sino también, la aplicación de un programa socialista para romper con el capitalismo y la dependencia imperialista, y unificar a las masas: educación pública gratuita y de calidad; trabajo digno, estable y seguro para todos y todas, con salarios decentes; derogación de todas las contrarreformas laborales; nacionalización de la banca, los monopolios y los latifundios bajo control obrero y campesino; plenos derechos económicos, sociales y políticos a las comunidades indígenas; suspensión de los acuerdos con el FMI y anulación de la deuda contraída por el Estado con los poderes imperialistas.

Sin lugar a dudas, estos doce días de protestas quedarán grabados a fuego en la conciencia colectiva de las masas ecuatorianas y de toda la región. Millones hemos visto con entusiasmo el levantamiento del pueblo luchador del Ecuador, que ha coincidido con explosiones sociales de masas en Chile, Iraq, Líbano, Hong Kong, Catalunya, etc. Así como el sistema se tambalea, es urgente construir un partido revolucionario consecuente capaz de llevar hasta el final la batalla.



Puedes leer el artículo completo
en www.izquierdarevolucionaria.net

Argentina no escapará de la rebelión continental



Carlos Ramírez
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La candidatura peronista encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el Frente de Todos, ha ganado las elecciones del pasado 27 de octubre con el 48,10% (12.473.709 votos), frente al 40,37% (10.470.607) logrado por la candidatura Juntos por el Cambio de Mauricio Macri.

También se renovaba parte del Congreso y del Senado y aunque en este último el peronismo obtiene la mayoría absoluta no es así en el Congreso, donde el macrismo es la primera fuerza con 120 escaños frente a los 109 del Frente de Todos. Esto contribuirá a introducir todavía más inestabilidad en la ya de por sí convulsa situación política argentina.

La victoria de Fernández ha sido lo suficientemente holgada como para no necesitar una segunda vuelta, aunque menos amplia de lo esperado. Varios factores explican este desarrollo.

En primer lugar, Macri, presentándose como el único muro de resistencia frente al *kirchnerismo* y a la lucha que la clase obrera y la juventud han protagonizado en estos años, ha conseguido atraer a su candidatura no solo a la oligarquía tradicional, también a la pequeña burguesía y a sectores atrasados de la población arrancando cientos de miles de votos al resto de candidatos reaccionarios.

El segundo aspecto es la política de Alberto Fernández y el oficialismo peronista. Desde que ganó las primarias en agosto, Fernández no ha hecho más que mandar mensajes de tranquilidad a los banqueros, al FMI y al Banco Mundial. Su tarea prioritaria ha sido trabajar por componer un pacto social entre la gran patronal y la burocracia de los sindicatos peronistas, con el objetivo de desactivar las movilizaciones de la clase obrera, favorecer más topes salariales y recortes sociales, y desviar el profundo descontento popular hacia las aguas del parlamentarismo. A la vez, no se ha recatado en pedir más “sacrificios” a la población para “volver a levantar a la Argentina”.

Los resultados del FIT-Unidad

Millones de trabajadores han utilizado la opción que les ofrecía el *kirchnerismo* para acabar con el Gobierno reaccionario de Macri. Por supuesto, el recuerdo de los anteriores gobiernos de los Kirchner en comparación a la pesadilla del *macrismo* ha tenido un peso electoral muy fuerte entre las capas más explotadas y desfavorecidas.

El FIT-Unidad, coalición electoral integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), ha sufrido un serio retroceso electoral. Ha conseguido 561.000 votos, el 2,16%, 162.000 menos que en las primarias, muchos de los cuales han ido al Frente de Todos. Tampoco ha conseguido renovar el diputado que tenían por la provincia de Buenos Aires, al que optaba el dirigente del PO, Néstor Pitrola, ni ha logrado el acta que perseguían por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que aspiraba Myriam Bregman, dirigente del PTS.



Derrota de Macri y victoria peronista

El sectarismo es una receta para los mayores desastres

Indudablemente en el FIT-U convergen miles de militantes obreros y activistas juveniles que están en primera línea de la lucha de clases firmemente comprometidos con la causa del socialismo. Por eso el balance político de estas elecciones tendrá un peso importante de cara a preparar las batallas decisivas que están por llegar.

En el artículo de Néstor Pitrola ‘Los aires de la victoria peronista’, publicado en *Prensa Obrera*, periódico del PO, podemos leer lo siguiente: “El voto a Alberto Fernández tiene un carácter contradictorio: explica el descontento y el hartazgo con el Gobierno responsable de las privaciones a que vienen sometiendo a la población, pero por otro lado expresa la ilusión y el apoyo a una salida patronal que pregona una política de rescate y estímulo al capital y al empresariado, y de compromiso con el FMI y los acreedores”.

La clase obrera ha visto en el Frente de Todos el instrumento electoral para deshacerse de Macri. Pero concluir de esta votación que los trabajadores apoyan incondicionalmente la hoja de ruta de Alberto Fernández y su programa no solo es un grave error, que contradice la experiencia de estos años en los que la clase obrera y la juventud han enfrentado la política del Gobierno de Macri duramente, también lo es porque considera que los oprimidos de Argentina, con su voto, han extendido un cheque en blanco a la dirigencia peronista y se quedarán cruzados de brazos cuando este ponga en marcha su agenda.

A pesar de que las organizaciones que integran el FIT-U se declaran trotskistas, el método del compañero Pitrola no tiene nada que ver con los cuidadosos análisis que de fenómenos semejantes realizó León Trotsky. Como él explicó, bajo la envoltura del voto de millones de obreros al Frente Popular francés o español en 1936, o al KPD y a la socialdemocracia alemana en los años treinta había una determinación clasista para luchar contra el fascismo y la reacción.

¿Argentina no es Chile?

En otra parte del mismo artículo Pitrola escribe: “El contraste entre el Chile que cuestiona treinta años de gobiernos de ambos polos de la democracia pinochetista —la Concertación y la derecha de Piñera— y su herencia de superexplotación y entrega, y la Argentina, donde vota el 81% del padrón a dos fuerzas sociales responsables de la deriva que ha llevado a una de las crisis capitalistas más explosivas de América Latina, es evidente”.

¡Es asombroso que alguien que se reclama trotskista sea capaz de escribir así! La clase obrera chilena votó en muchas ocasiones por la Concertación y el PS, y por el Partido Comunista de Chile —sin ir más lejos en las últimas presidenciales de 2017—, organizaciones cuyas políticas se diferencian muy poco de las llevadas a cabo por el *kirchnerismo*.

Hoy son esas mismas masas de trabajadores y jóvenes las que han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Piñera y abierto una crisis revolucionaria como no se conocía desde los años de la Unidad Popular.

Lamentablemente, con el método de análisis del compañero Pitrola, el estallido social que se está incubando en Argentina podría tomar por sorpresa al PO y al FIT-Unidad limitando su capacidad para intervenir y ofrecer una política justa. La experiencia chilena lo demuestra. La mayoría de las organizaciones que componen el FIT-U no proponen una alternativa socialista que rompa con el capitalismo y ponga la lucha por la democracia obrera como eje, defienden como consigna una “asamblea constituyente, libre y soberana”, o lo que es lo mismo, una fórmula “más genuina y avanzada”, y más utópica, de democracia burguesa en el contexto del capitalismo decadente del siglo XXI.

El tiempo de gracia del que va a gozar Alberto Fernández será más corto que el de los anteriores gobiernos *kirchneristas*. La experiencia de estos años no ha pasado en balde: a pesar de los denodados esfuerzos del futuro presidente por alcanzar un pacto que garantice la paz social, más pronto que tarde la clase obrera y la juventud exigirán medidas reales y efectivas para acabar con el paro, la inflación, la precariedad laboral y la pobreza inspiradas además por las rebeliones y levantamientos que recorren el continente latinoamericano y el mundo entero.

Las condiciones objetivas para una escalada revolucionaria están presentes en Argentina. Esa es la perspectiva para la que debe prepararse la vanguardia obrera y sus organizaciones de lucha.



Puedes leer el artículo completo en www.izquierdarevolucionaria.net

Ni la represión ni las maniobras detienen el movimiento

Continúa la insurrección en Iraq



Miguel Ángel Domingo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El 1 de octubre comenzó el mayor levantamiento de las masas iraquíes de las últimas décadas. Las imágenes que llegaban a través de las noticias y las redes sociales eran sobrecogedoras: miles de jóvenes se enfrentaban desarmados a la munición real de la policía y el ejército. La salvaje represión de los primeros quince días dejó más de 150 muertos, más de 6.000 heridos y cientos de detenidos.

Han pasado dieciséis años desde la invasión imperialista que desalojó a Sadam Husein. El 60% de los 40 millones de iraquíes tiene menos de 30 años y el desempleo juvenil se sitúa entre un 25% y un 40%, según las fuentes. La mayoría de la población solo ha conocido las condiciones de vida de pesadilla de la posguerra. Según cifras oficiales, “desde 2004, cerca de 450.000 millones de dólares de fondos públicos se han desvanecido en los bolsillos de políticos y empresarios”.

“El pueblo quiere la caída del régimen”

Las consignas del movimiento desnudan al régimen capitalista iraquí: contra el pa-

ro, contra la corrupción rampante, contra el estado deplorable de los servicios públicos, contra el Gobierno de un país con las quintas mayores reservas de petróleo del mundo que es incapaz de proporcionar electricidad a su población, contra el sectarismo y la injerencia de potencias extranjeras —apuntando tanto a EEUU como a Irán— y, mostrando el hartazgo generalizado hacia todo el aparato institucional, se recuperó la consigna de la primavera árabe de 2011: “el pueblo quiere la caída del régimen”.

Este terremoto social comenzó en Bagdad y se extendió rápidamente hacia el sur mayoritariamente chií, enfatizando el carácter no sectario del movimiento, algo que refleja las lecciones aprendidas de años de sectarismo promovido por el imperialismo y las diferentes potencias regionales que han utilizado el veneno de la división religiosa.

Ante el fracaso de la represión las primeras semanas, el Gobierno intentó jugar la carta de la negociación. Anunció vagas reformas en un intento de que las masas desalojaran las calles. Tras una tregua tácita de dos semanas, el viernes 25 de octubre volvieron a tomarse las calles con fuerzas renovadas y con una disposición aún mayor de llegar hasta el final. La represión volvió de forma brutal: casi

ochenta asesinados en tres días y miles de heridos.

El 1 de noviembre, conmemorando un mes de movilizaciones, tuvo lugar una de las mayores manifestaciones que ha habido desde la caída de Sadam. La posición de los revolucionarios en la plaza Tahrir en Bagdad se ha fortalecido, incluso han avanzado hacia la zona verde, el distrito blindado donde se aloja el Gobierno. En el sur la lucha también se ha endurecido: en Kerbala, 18 manifestantes fueron asesinados en una sola noche por encapuchados, sospechosos de formar parte de las milicias proiraníes; en Um Qasar, el Gobierno consiguió retomar el control de uno de los principales puertos del país, que llevaba semanas paralizado...

Al Sadr y las milicias pro-Irán

Todos los actores, nacionales e internacionales, están intentando posicionarse ante una explosión social que nadie había previsto. De estos, dos son especialmente interesantes por el papel que han jugado y el que pueden desarrollar a partir de ahora.

Por un lado está el movimiento del clérigo chií Muqtada Al Sadr, con una base de masas que comenzó entre la población chií más oprimida pero que ha crecido utilizando una retórica nacionalista iraquí no sectaria. Se presentó junto al Partido Comunista a las últimas elecciones y fueron la candidatura más votada. Pero aunque haya podido ser un termómetro del ambiente entre las masas en diferentes momentos, Al Sadr está muy lejos de ser un revolucionario.

Está intentando conectar con las masas que han pasado por encima de él. Asistió a una manifestación en Nayaf pero fue rechazado. Ha conseguido que sus milicianos entren desarmados en la plaza Tahrir en Bagdad “para defender a los manifestantes”, aunque muchos mostraron su hostilidad a quien ha sido un sostén decisivo del Gobierno.

Ahora ha pedido la dimisión del primer ministro, alertando del riesgo de una guerra civil si no lo hace. No le va a resultar fácil: el movimiento no quiere solo la dimisión de Mahdi, quiere un cambio radical en sus condiciones de vida, y ese cambio comienza con “la caída del régimen”.

Por otro lado, las milicias proiraníes formaron la coalición Fatah, que es el segundo grupo parlamentario. Fatah y Al Sadr han sido los principales sostenes del actual Gobierno. Cuando Al Sadr exigió la dimisión de Mahdi, en un primer momento Fatah se unió a la exigencia, lo que dejaba sin apoyos al primer ministro. Sin embargo, Irán ha movido ficha y va a defender con firmeza el actual Gobierno, igual que ha hecho en Líbano a través de Hezbolá. Fatah está amenazando cada vez más claramente con “poner orden” si las protestas no terminan. Según diferentes medios, en los primeros días de la rebelión, el general Qasem Soleimani, responsable de la actividad de la Guardia Revolucionaria iraní en el exterior, asistió a una reunión con responsables de seguridad en Bagdad en la que dijo: “en Irán sabemos cómo tratar a los manifestantes”. Tras esa reunión se generalizaron los disparos a la cabeza y al pecho e hicieron su aparición milicianos encapuchados.

El régimen iraní ha acusado a “agentes” respaldados por EEUU, Arabia Saudí e Israel de ser los responsables de la situación en Iraq, exactamente igual que ha hecho en Líbano. Tiene motivos para la alarma. Por un lado, un movimiento de masas está cuestionando su posición en Iraq, clave y cuidadosamente construida. Por otro lado, esta rebelión no sectaria —que ya sacude Iraq y Líbano— podría extenderse a Irán y reavivar las movilizaciones que protagonizó la clase obrera iraní en 2017-18 contra el paro, la caída del nivel de vida y los recortes sociales generalizados, en un momento en que las sanciones de EEUU a Irán están golpeando duramente su economía, con efectos dramáticos para las masas.

Por una alternativa revolucionaria

La revolución iraquí está vinculada al ascenso de la lucha de clases en el mundo árabe. Empezando por Argelia y Sudán y continuando con la rebelión en Líbano. El capitalismo se encamina a una crisis económica que tendrá consecuencias muy profundas, más aún en zonas como Oriente Medio. Las movilizaciones de los trabajadores, los jóvenes, los pobres, las mujeres..., en estos países en los últimos años demuestran cómo el movimiento aprende de su experiencia, de sus derrotas, pero es necesario un paso más. Ni la burguesía de estos países ni el imperialismo tienen nada que ofrecer, excepto corrupción, miseria y guerras.

Una de las consignas más coreadas en las manifestaciones en Iraq ha sido “Ni políticos ni religiosos”, reflejando el rechazo a toda la clase dominante. Ningún partido ha podido erigirse como portavoz de las masas y hasta ahora eso ha sido un factor muy positivo. Pero desde todos los ámbitos —Gobierno, partidos oficiales, autoridades religiosas, imperialismo...— van a intentar secuestrar la revolución.

Para enfrentar esto es necesario levantar una alternativa revolucionaria, basada en la clase obrera, la juventud y los oprimidos, la única fuerza que se ha demostrado capaz de poner en cuestión el régimen capitalista iraquí.





Las masas ponen en jaque al régimen

Revolución en Líbano



Comisión Ejecutiva de
Izquierda Revolucionaria

Tras las insurrecciones en Argelia y Sudán, las masas iraquíes estallaron el pasado 1 de octubre. Apenas dos semanas después, el día 17, dio comienzo el mayor levantamiento que se recuerda en décadas en el Líbano, que ha culminado de momento en la dimisión del primer ministro Saad Hariri. Estos acontecimientos históricos anuncian un segundo y grandioso acto de la Primavera Árabe, una revolución en marcha contra el capitalismo y el orden imperialista.

El saqueo de la economía por la oligarquía

Líbano está al borde del colapso económico tras décadas de políticas capitalistas en beneficio de la oligarquía y el imperialismo, y una corrupción crónica que ha dejado el 60% de la riqueza nacional en manos de 2.000 familias. La deuda pública alcanza el 150% del PIB, lo que equivale a 75.800 millones de euros. La libra libanesa mantiene un cambio fijo con el dólar desde 1997 y está sobre la mesa una devaluación.

Para hacer frente a esta situación el imperialismo ofreció una inyección de 10.000 millones de euros a cambio de un plan de recortes sociales. Hariri se puso rápidamente a ello, declarando el “estado de emergencia económica” y anunciando “las medidas más austeras de la historia de Líbano”.

El 30% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y la tasa de paro es del 25%; el 1% más rico acapara el 58% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre tiene menos del 1%. El estado de las infraestructuras es lamentable, con cortes de electricidad diarios de hasta doce horas, y la población sufre a las mafias que hacen negocio con el agua y electricidad, a su vez ligadas a diferentes grupos políticos y religiosos; hay sistemas muy deficientes de transporte, de tratamiento de basuras y aguas residuales, y lo mismo ocurre con los sistemas de sanidad pública o pensiones.

En este contexto el Gobierno anunció la famosa “tasa WhatsApp”, solo unos días después de hacerse público que el primer ministro había gastado 16 millones

de dólares en regalos a una modelo sudanesa con la que mantuvo una relación. Fue la gota que desbordó el vaso de la indignación social contra la cleptocracia libanesa.

Cuestionamiento del régimen sectario

Desde que comenzaron las protestas una idea dominó la conciencia de los cientos de miles que tomaron las calles: el cuestionamiento de todo el régimen político sectario establecido hace décadas por el imperialismo, y su identificación como el culpable de la actual situación.

El Estado libanés es un monstruo erigido en el proceso de descolonización. La constitución de 1926 y el Pacto Nacional de 1943 (año de la independencia de Francia) consagraron la división religiosa del país, dividiendo la representación parlamentaria entre las 18 confesiones diferentes reconocidas. Los principales cargos del Ejecutivo se repartieron sobre una base sectaria: presidente cristiano, primer ministro sunita y presidente del parlamento chiíta. Esto se hizo sobre la base de un censo de 1932, que es el que se mantiene vigente. El acuerdo de Taif de 1989 —también auspiciado por el imperialismo—, que puso fin a 15 años de guerra civil libanesa, no tocó este sistema.

Muchos de los dirigentes parlamentarios actuales pertenecen a las mismas familias que dominaban las agrupaciones políticas en 1943, conformando una casta política parásita y corrupta que saquea a manos llenas la riqueza del país.

Cambios profundos en la conciencia

Las movilizaciones que se están desarrollando no tienen precedentes, ni en la extensión geográfica ni en lo que reflejan en cuanto a la transformación de la conciencia. Se calcula que ha participado en torno a un 30% de la población por todo el país, una muestra de ello fue la cadena humana convocada el 28 de octubre que se extendió de norte a sur a lo largo de 171 kilómetros. Las protestas, paros, manifestaciones, cortes de carreteras, etc., se llevan a cabo de forma ininterrumpida desde el 17 de octubre.

Esta rebelión también clarifica los debates recurrentes acerca de la “baja conciencia revolucionaria” o “el papel de la clase obrera”. Líbano es un país urbano, el 90% de la población vive en ciudades, y desde hace meses asistimos a luchas obreras en ascenso que en el actual contexto se han extendido. El movimiento obrero ha jugado un papel central en las huelgas generales del 21 de octubre y el 4 de noviembre, y en los numerosos paros que se han producido en diferentes sectores en el transcurso de estas semanas.

Este es el país de la división sectaria más refinada, organizada legalmente a lo largo de décadas. Y la única fuerza que ha sido capaz de poner todo ese entramado en tela de juicio ha sido la movilización de masas, armada con los métodos de lucha clásicos de la clase obrera: la huelga, las asambleas, la paralización del país hasta conseguir la caída del régimen.

Retroceso del Gobierno y dimisión de Hariri

Después de una semana de protestas, Hariri ofreció un paquete de medidas para “satisfacer a la población”: reducción del 50% de los sueldos a los ministros, una ley “para devolver el dinero público robado” y cuestiones similares. Algo que llegaba tarde y que nadie se creía. Unos días después, Hariri presentó su dimisión. Esto, en lugar de poner fin a las protestas, fue recibido en las manifestaciones por otra consigna del movimiento: “¡Todos

significa todos!”, no habrá tregua hasta la caída del régimen.

A pesar del entramado sectario del Gobierno y del aparato del Estado, había un Gobierno prácticamente de unidad nacional. Lo sintomático es la resistencia a la convocatoria de nuevas elecciones y a la renuncia de Hariri, en primer lugar de Hezbolá. La organización chií, aliada de Irán, sostuvo su influencia en el pasado presentándose como la “organización de los pobres chiítas”. Sin embargo, desde que estalló el movimiento revolucionario, su dirigente Nasralá ha sido el más beligerante en llamar públicamente a abandonar las protestas, incluso sus milicianos se han enfrentado a los manifestantes mostrando el carácter reaccionario de la organización y dejando en evidencia que sus posiciones no son más que demagogia populista.

Luchar por el socialismo

Si bien la clase obrera ha jugado un papel central, el movimiento muestra debilidades que es necesario superar. El hecho de que ninguna de las organizaciones tradicionales haya dirigido, ni siquiera apoyado, las movilizaciones ha hecho más difícil al Estado controlarlas, y es un síntoma de la falta de autoridad de un sistema político podrido.

Pero la oligarquía libanesa, sus diferentes variantes sectarias, y el imperialismo van a maniobrar para descarrilar la lucha del pueblo libanés. Tienen experiencia y organizaciones preparadas para ello. Está por ver qué ocurre con el nuevo Gobierno, cómo se desarrolla, quién lo encabeza, pero ya tienen un objetivo claro: aplastar el levantamiento por todas las vías posibles.

La solidaridad internacionalista con el pueblo libanés es más necesaria que nunca. Y la primera tarea es contribuir a que esta rebelión cuente con un partido revolucionario, basado en la clase obrera, la juventud y los oprimidos, la única fuerza que ha puesto patas arriba el régimen capitalista libanés. Un partido armado con el programa del marxismo que sea capaz de ponerse al frente de la población para derrocar a la oligarquía, expulsar al imperialismo y expropiar las palancas fundamentales de la economía bajo el control democrático de la población. De esta manera, un Gobierno de los trabajadores podría comenzar la transformación socialista de la sociedad y tendría un efecto formidable en todo Oriente Medio y el mundo árabe, unificando la lucha de los oprimidos de Líbano, Iraq, Sudán y Argelia.



Puedes leer el artículo completo en www.izquierdarevolucionaria.net



¡No a la agresión imperialista contra el pueblo kurdo!



Juana Cobo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El ataque e invasión militar de Turquía del noreste de Siria el pasado mes de octubre representa una nueva etapa en esta guerra. El anuncio de Donald Trump de que las tropas norteamericanas abandonarían Siria y que EEUU no intervendría en un conflicto entre turcos y kurdos dio luz verde al presidente turco Erdogan para atacar a la población kurda del noreste sirio.

Esta región está actualmente controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza de milicias kurdas, árabes, turcomanas y de otros pueblos dirigida por las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) y las Unidades de Defensa de Mujeres (YPJ), las milicias del Partido kurdo de la Unión Democrática (PYD). Fueron estas milicias las que realmente derrotaron y expulsaron a los yihadistas del ISIS, en una alianza desigual con el ejército estadounidense: el coste de muertes en combate fue de 6 soldados norteamericanos y 11.000 milicianas y milicianos kurdos.

En su discurso en septiembre ante la ONU, Erdogan anunció su propósito, consensuado con EEUU, de “establecer una zona de seguridad en Siria (...) un corredor para la paz de 30 kilómetros de ancho y 480 kilómetros de largo en Siria y permitir que se asienten aquí dos millones de sirios con el apoyo de la comunidad internacional”.

Más allá de la hipocresía sobre el carácter “humanitario” de este ataque militar, que causará miles de muertos y el desplazamiento de centenares de miles de kurdos, lo que realmente mueve a Erdogan son sus ambiciones imperialistas en Oriente Medio. Una vez conquistado

el noreste sirio, Turquía pretende controlar este territorio ocupado a través de grupos de mercenarios islamistas procedentes del Ejército Libre Sirio. Un ejemplo de lo que sucederá si lo consigue es la situación que hoy vive la ciudad siria de Afrin, controlada desde febrero por el ejército turco y los islamistas: miles de civiles muertos, más de 200.000 personas han abandonado sus hogares y un régimen de máxima represión.

Rojava es una amenaza para el régimen turco

En 2013, después de sufrir la barbarie y expulsar al ISIS, los kurdos tomaron el control del norte sirio, declararon su autonomía y crearon la Federación Democrática del Norte de Siria, conocida como Rojava. Establecieron un estado laico, en el que se reconoce la igualdad de género, y su constitución incluye el respeto y la protección de todas las minorías étnicas y religiosas que forman la región.

Hay que recordar que existen más de 30 millones de kurdos y representan la nación sin estado más grande del mundo. El territorio donde debería situarse su estado, la región conocida como Kurdistán, se lo reparten Turquía, Iraq, Irán y Siria, países todos ellos donde los kurdos son una minoría oprimida. La creación de Rojava despertó enormes simpatías y se convirtió en un punto de referencia para la lucha del pueblo kurdo por la consecución de un Estado propio. Además, la existencia de un territorio autónomo de mayoría kurda, al sur de la frontera turca, liberado por la acción directa de población armada es visto como una alternativa antisectaria ante la barbarie impuesta por los fundamentalistas y el imperialismo, y un avance en la li-

beración de los trabajadores, jóvenes y mujeres de toda la región. Precisamente por ello se trata de una importante amenaza para Erdogan, cuyo principal objetivo es romper los vínculos de los kurdos que habitan el sur de Turquía con los enclaves kurdos del norte de Siria, y acabar con la aspiración de independencia de los kurdos de Turquía.

Erdogan azuza el nacionalismo turco

El presidente turco pretende crear una “zona de seguridad” en el norte sirio para alojar a una parte de los 3,6 millones de refugiados sirios que malviven en Turquía. Con su expulsión a tierras kurdas pretende resolver el problema económico que representa albergar y mantener a los refugiados, y al mismo tiempo fortalecer su posición interna, sobre todo después de sufrir la mayor derrota en veinte años en las últimas elecciones municipales.

Con el empeoramiento de la economía turca, la intensificación de la lucha de clases, y sin ningún logro que presentar a la población turca, su régimen dictatorial se basa cada día más en avivar el nacionalismo turco y los sentimientos contra los kurdos. Espera que si su aventura imperialista tiene éxito, pueda recuperar el apoyo perdido.

Esta operación militar no es un reflejo de la fortaleza de Erdogan, sino de su debilidad, y por ello corre riesgos. Cuanto más se prolongue la invasión y la guerra de guerrillas con las milicias kurdas, mayor será el impacto en el Kurdistán turco. Y si logra su objetivo de recolocar a los refugiados sirios en el Kurdistán sirio preparará el terreno para nuevas divisiones y masacres étnicas. A los refugiados de mayoría árabe se les ofrece un nuevo

“hogar” del que primero hay que expulsar a otros. Se siembran así las semillas de futuros enfrentamientos y divisiones de carácter étnico y nacional.

De la mano del imperialismo jamás se liberará el pueblo kurdo

La invasión turca y la retirada de EEUU tienen además consecuencias internacionales que afectan al papel de las distintas potencias mundiales y regionales en la guerra siria. La retirada de las tropas por parte de Trump ha provocado un fuerte malestar entre la sectores de la clase dominante norteamericana —empezando por el propio aparato de Partido Republicano—, que acusan al presidente de dejar el camino libre en Siria para el fortalecimiento de las posiciones de Rusia, Irán y el presidente sirio Al-Assad.

Por lo pronto, el ejército sirio y las milicias kurdas ya han llegado a un acuerdo para permitir la entrada hasta la frontera turca de las tropas sirias, lo que permitirá al régimen de Al-Assad recuperar el territorio perdido durante la guerra. Irán es otro jugador de primer orden que estos últimos años ha desplegado miles de soldados para apoyar al Gobierno sirio en el marco de su propio enfrentamiento con EEUU. Por su parte, Rusia ha llegado a un acuerdo con Turquía para desplegar tropas rusas que son las que deben garantizar la retirada de las milicias kurdas de la frontera siria, el primer paso para expulsar a los kurdos de Rojava.

Como tantas otras veces en la historia del capitalismo, la suerte y el destino del pueblo kurdo es un ejemplo de cómo las pequeñas naciones son solo un peón dentro del juego de las grandes potencias, que las utilizan sin ningún tipo de escrúpulo y cuando ya no son útiles para sus intereses las abandonan y si es necesario las aplastan. Todos los actores presentes en Siria —EEUU, la Unión Europea, Rusia, Irán, el régimen sirio e incluso Erdogan— en algún momento han hecho promesas al pueblo kurdo, y todos lo han traicionado tan pronto han logrado sus objetivos.

Es un grave error que los líderes kurdos sigan buscando una solución en el apoyo de unas u otras fuerzas imperialistas. Jamás se produjo la liberación de ningún pueblo de la mano del imperialismo. El pueblo kurdo solo podrá lograr sus derechos democráticos, empezando por la consecución de un Estado independiente, luchando conjuntamente con los oprimidos de toda la región, los millones de trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes y campesinos pobres árabes, turcos e iraníes: los auténticos aliados del pueblo kurdo.

Es necesario levantar una movilización de masas por el control democrático de los recursos y las palancas fundamentales de la economía, expropiando a las distintas burguesías regionales y al imperialismo, y defender una Federación Socialista de Oriente Medio, la única alternativa para acabar con los enfrentamientos étnicos y religiosos y permitir un reparto justo de las enormes riquezas presentes en la región.



Gran Bretaña: crisis del Brexit y elecciones generales

¡Abajo el Gobierno tory y sus políticas de austeridad!



Víctor Taibo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El próximo 12 de diciembre se celebrarán las terceras elecciones generales en Gran Bretaña en el plazo de cuatro años, una situación insólita que refleja la profundidad de la crisis política e institucional que vive el país. Finalmente el primer ministro, Boris Johnson, tras jurar y perjurar que Gran Bretaña estaría fuera de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre, tuvo que solicitar una nueva prórroga (la tercera) a la UE, que esta aceptó, postergándose la salida al 31 de enero de 2020. La crisis del Brexit, tras casi cuatro años desde la celebración del referéndum, sigue abierta y no parece que vaya a tener una solución definitiva y estable a corto plazo.

Nuevo aplazamiento del Brexit

El nuevo acuerdo adoptado por Johnson con la UE ha sido ratificado por el momento por el Parlamento británico, quedando pendientes de aprobación las leyes que deben concretarlo y llevarlo a la práctica. Esta será la primera tarea a abordar por el nuevo parlamento que salga de las elecciones, condicionando probablemente la conformación del nuevo Gobierno. El acuerdo por tanto sigue estando en el aire, y solo ha supuesto ganar algo de tiempo, apostando la solución al desenlace electoral.

Un acuerdo que cuenta además con el rechazo del hasta ahora socio privilegiado de los conservadores, el DUP, los unionistas ultraconservadores de Irlanda del Norte, contrarios a que la frontera efectiva con la UE se sitúe en el Mar del Norte, es decir, entre Irlanda del Norte y el resto de Gran Bretaña, y que por tanto Irlanda del Norte siga en la Unión Aduanera. Una situación que el DUP y los protestantes temen, pues da alas a la idea de la unificación irlandesa, y que en su momento incluso Theresa May rechazó. Boris Johnson ha ido más lejos, ignorando completamente a sus socios del DUP.

Toda esta situación, como hemos explicado en otros artículos, es consecuencia directa de la grave crisis social que padece Gran Bretaña desde hace décadas, y que se agravó con el estallido de la crisis económica y las políticas de austeridad y recortes de los sucesivos gobiernos conservadores. Recientemente, por ejemplo, la Resolution Foundation ha señalado que el crecimiento de los salarios en la última década, entre 2010 y 2020, ha sido el menor en tiempos de paz desde las Guerras Napoleónicas, aumentando cada día más el número de personas que a pesar de tener trabajo son pobres. Diferentes informes señalan que cada vez más familias británicas se ven obligadas recurrir a la ayuda de ONGs para garantizar lo básico, por ejemplo, zapatos para sus hijos. Al mismo tiempo, la brecha entre ricos y pobres no deja de crecer, solamente las mil personas más ricas de Gran Bretaña acumulan 771.000 millones de libras.

Dentro o fuera de la UE capitalista no hay solución a la crisis social británica

Por otro lado, desde el referéndum del Brexit en 2016 la economía británica ha perdido un 2,5% de su PIB y la inversión exterior ha caído en un 15%, demostrando la imposibilidad de desconectar de una economía globalizada y el fracaso del nacionalismo económico. La patronal británica ha señalado que tanto el sector de la manufacturas como el de la construcción, es decir, los sectores productivos, se hallan desde hace meses en recesión, con récord de insolvencias desde 2013 y una caída continuada de los pedidos durante los últimos seis meses. Las inversiones futuras en inmuebles de las empresas han descendido también un 44% y las inversiones en maquinaria y plantas industriales para los próximos doce meses, un 34%.

Todo esto se produce en el contexto de guerra comercial y arancelaria del que forma parte el propio Brexit. La burguesía británica se encuentra totalmente dividida, con un sector apostando por la

alianza con los EEUU, mientras otro sigue mirando a la UE, especialmente el sector exportador industrial puesto que el 50% de sus productos va a los mercados de la UE. Eso es lo que explica la entrada en la campaña electoral británica de Trump, dedicando furibundos ataques al laborista Jeremy Corbyn y abogando por una alianza entre Nigel Farage (Partido del Brexit) y Boris Johnson (Partido Conservador), insistiendo además que el acuerdo con la UE aceptado por Johnson es malo.

El capital norteamericano ve grandes oportunidades de negocio en el mercado británico, y sectores de la burguesía británica ven con buenos ojos la agenda económica ultracapitalista de Trump: privatizaciones, desregulación y bajadas de impuestos para grandes fortunas y multinacionales. Frente a este modelo, lo único que ofrece la Unión Europea son las políticas de austeridad y recortes, llevadas adelante por la burguesía británica de cara a garantizar sus negocios. Tanto fuera como dentro de la UE, bajo el capitalismo no existe alternativa para la clase obrera y la juventud.

Votar a Corbyn y luchar por un programa auténticamente socialista

En este contexto, una victoria electoral de los laboristas encabezados por Corbyn, con el programa electoral más izquierdista en décadas, sería la peor de las noticias tanto para la burguesía británica, como para Trump y la UE. De ahí la campaña unánime de los medios de comunicación tachando el programa laborista como una locura y un peligro. Entre otras cosas, Corbyn está defendiendo la reversión de las privatizaciones y la nacionalización de sectores clave de la economía como los ferrocarriles, el servicio postal, el agua o las principales industrias energéticas. Otro punto fundamental es la defensa de los servicios públicos con un plan de inversiones para la educación pública y el Servicio Nacional de Salud (NHS), en crisis desde hace años. También aboga por la abolición de las tasas universitarias y la eliminación de los contratos de cero horas, contratos precarios extremos donde el empresario solo paga por las horas efectivamente trabajadas. Un programa y una campaña que está señalando a ese puñado de multimillonarios responsables de la grave crisis social que padece el país.

Para que Corbyn pueda llevar a la práctica este programa es decisivo basarse en la movilización en las calles y en la fuerza organizada de la clase trabajadora y la juventud. Durante estos meses de grave crisis institucional, incluyendo el cierre del Parlamento, Corbyn ha cometido el error de dirigirse y pedir el apoyo de los diputados conservadores y liberales, responsables de las políticas de austeridad y de recortes que han sumido a millones en la pobreza y la desesperación. El único apoyo que Corbyn puede esperar es la de la clase trabajadora. Otro importante error es el rechazo al derecho de autodeterminación de Escocia, oponiéndose a la celebración de un segundo referéndum de independencia.

Una victoria de Corbyn supondría un auténtico terremoto. Sin embargo, al día siguiente, tanto la clase dominante británica como la burguesía europea y norteamericana, como ocurrió en Grecia, se pondrían en marcha de cara a aplastar un Gobierno de este tipo. Por eso mismo, no solo hay que prepararse para una posible victoria, sino para la batalla a enfrentar al día siguiente de la misma, que solo podrá afrontarse mediante la movilización masiva en las calles de la clase obrera y la juventud para confrontar con los grandes poderes económicos, y contando con el apoyo y la solidaridad del resto de pueblos de Europa.





EEUU a un año de las presidenciales

La candidatura de Bernie Sanders en ascenso



Beatriz García
Izquierda Revolucionaria
Asturias

El FMI en su informe del pasado mes de junio revisaba al alza las previsiones anuales de crecimiento para EEUU, de 2,3% a 2,6%. A la vez, advertía sobre los “problemáticos” indicadores sociales del gigante americano, como la tasa de pobreza que afecta a 45 millones de personas, un 13,7% de la población.

El deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera norteamericana y de la población en general, agravado por las consecuencias de la política de Trump después de tres años en la Casa Blanca, contrasta con la acumulación obscena de riqueza en una ínfima minoría de multimillonarios y es el combustible de la polarización política que sacude la sociedad norteamericana.

Oleada de huelgas, la clase obrera pasa a la acción

“Al menos el 40% de las personas a las que servimos están trabajando, tienen entre dos y tres empleos, tienen hijos, pueden estar tratando de acabar en el sofá de alguien, algunos viven en edificios abandonados, en sus automóviles, vienen aquí a comer y se van a trabajar”. Estos son los testimonios de responsables de comedores para gente sin hogar en Atlanta, y es que 46 millones de estadounidenses dependen de los bancos de alimentos, un 30% más que en 2007. El empleo creado ha incrementado la precariedad, disparado el “subempleo” y el número de trabajadores pobres.

Debido a la necesidad de recurrir a préstamos para sobrevivir, la deuda de los hogares ha alcanzado cifras históricas: 13,7 billones de dólares, superando el pico registrado en 2008, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Golpeados por esta realidad, sectores cada vez más amplios de la clase obrera norteamericana están protagonizando luchas importantes. De hecho, el pasado año el número de jornadas de huelga fue el más alto desde 1968.

El pistoletazo de salida lo dieron en febrero los profesores de West Virginia. Desafiando la ley que ilegalizaba las huelgas en el sector público y tras nueve días de paro lograban una subida salarial del 5%. Inspirados por esta victoria, les siguieron los profesores de Arizona, Colorado, Carolina del Norte, Oklahoma, California o Chicago.

Los trabajadores también se han tenido que enfrentar en numerosas ocasiones a la dirección de los sindicatos, que en muchos casos han intentado llegar rápidamente a un compromiso con la administración o la patronal. Por ejemplo, el sindicato de profesores de Chicago, CTU, llegaba a un acuerdo y desconvocaba una huelga, que duraba ya dos semanas, con la oposición del 40% de los profesores.

Lo mismo hemos podido ver con la histórica huelga de General Motors iniciada el 16 de septiembre. Seis semanas de huelga en las que casi 50.000 trabajadores han paralizado la producción en 33 fábricas y 22 centros de distribución. La dirección del sindicato, UAW, defendió levantar la huelga tras conseguir algunas mejoras en el convenio para una capa de los trabajadores a cambio de aceptar, entre otras cosas, cierres de plantas. El 57% de la plantilla votaba a favor en ausencia de otro plan de lucha, pero

la oposición a abandonar la huelga ha sido fuerte, sobre todo entre los trabajadores de las categorías inferiores que votaron *no*, o los de la planta de Lordstown (Ohio), una de las que cerrarán, donde el *no* fue superior al 80%.

Estos ejemplos son un buen reflejo del incremento de la radicalización de capas importantes de la clase obrera y del crecimiento de la confianza en sus propias fuerzas.

El fenómeno de Bernie Sanders sigue creciendo

Este empuje muestra la profunda convulsión que se está desarrollando en los cimientos de la sociedad norteamericana, y es la fuerza que impulsa a Bernie Sanders, el único candidato que se ha implicado en las huelgas defendiendo a los trabajadores. Este proceso también se ve en el movimiento sindical, con multitud de sindicatos locales o nacionales (trabajadores de maquinaria, electricidad, radio...) que apoyan la candidatura de Sanders; así como dirigentes sindicales, como la presidenta de la Asociación de Asistentes de Vuelo, Sara Nelson, que goza de una gran autoridad entre los trabajadores y que jugó un papel clave en el fin del cierre del Gobierno que durante cinco semanas impuso Trump, con el llamamiento que hizo a la huelga general a principios de este año.

El movimiento que aúpa a Sanders provoca pánico en la clase dominante de Estados Unidos, empezando por los dirigentes del propio Partido Demócrata, que ahora intentan canalizar el descontento social a través del *impeachment* contra Trump.

La irrupción de Sanders en 2016 —consiguiendo 13 millones de votos en las primarias y venciendo al aparato demócrata en 22 estados— marcó un punto de inflexión para el surgimiento de nuevos candidatos a la izquierda, dentro y fuera del Partido Demócrata, vinculados a las luchas sociales. Un ejemplo fue el de Alexandria Ocasio-Cortez, entre otras, que llegó al Congreso tumbando en las primarias al candidato del aparato. Es relevante el caso Kshama Sawant, miembro de Socialist Alternative, que acaba de ser reelegida concejala al Ayuntamiento de Seattle,

derrotando a Egan Orion, candidato respaldado por el gigante Amazon, en cuya campaña la compañía ha invertido cientos de miles de dólares. Sawant lideró en 2018 una potente campaña para imponer un impuesto a las grandes empresas instaladas en la ciudad y destinar esos recursos a servicios sociales.

De cara a las primarias demócratas que se desarrollarán entre febrero y julio de 2020, la dirección del Partido Demócrata y los grandes medios de comunicación afines apuestan decididamente por Joe Biden —exvicepresidente de Obama y claro candidato del aparato— y Elisabeth Warren —capitalista declarada y autoprotclamada como la opción “feminista, progresista y razonable”— en contraposición al “radical” Sanders. Las últimas encuestas oficiales sitúan a Warren con el 27% de apoyos, por delante de Biden (25%) y con Sanders en tercer lugar (16%).

Pero estos datos contrastan con el espectacular apoyo que está recibiendo la campaña de Bernie Sanders. Cuando en febrero de 2019 anunció su candidatura recaudó en 24 horas 5,9 millones de dólares de 225.000 donantes. Desde entonces ha celebrado multitud de mítines masivos, como el que tuvo lugar en octubre en Queens con 25.000 personas.

La clase trabajadora necesita construir su propio partido

El gran mérito de Sanders es haber situado las reivindicaciones de la clase trabajadora en el primer punto del debate político; sus límites fundamentales son, por un lado, presentar un programa que no plantea la ruptura con el capitalismo y, por otro, negarse a romper definitivamente con el Partido Demócrata, a pesar de la experiencia de las anteriores primarias cuando sufrió numerosas maniobras burocráticas para no salir elegido como candidato.

El 43% de los norteamericanos considera que el socialismo “sería algo bueno para el país”; toda la experiencia está demostrando que existe un enorme potencial para la formación de un partido de los trabajadores dotado de un genuino programa socialista. La profundización de la crisis capitalista y de lucha de clases en los Estados Unidos hará que capas cada vez más amplias de la clase obrera asuman esta tarea como prioritaria.



Nuevas publicaciones de la Fundación Federico Engels



Fundamentos de economía marxista

León Trotsky 132 páginas • 10 euros

Los textos de Trotsky incluidos en este libro dan idea de la fortaleza científica de la economía política marxista y de su método dialéctico. Aunque escritos en otras circunstancias históricas, contienen respuestas a muchas de las preguntas planteadas por la actual crisis económica.

No tiene sentido negar que el capitalismo tuvo el gran mérito histórico de elevar enormemente la técnica y la productividad del trabajo, crear una economía global y establecer las condiciones objetivas para que los recursos del planeta puedan ser utilizados

de forma racional y sostenible. Sin embargo, la economía de mercado del siglo XXI no solo está más lejos que nunca de cumplir tal tarea, sino que el avance de la tecnología y la sobreabundancia de capitales y mercancías se convierten —bajo el imperio de la propiedad privada y el Estado nacional— en causa de una pobreza lacerante, un paro estructural, una precariedad laboral extrema y un daño inmenso al medio ambiente.

Las fuerzas productivas mundiales necesitan un nuevo sistema social que las organice y planifique armoniosamente. Únicamente la nacionalización de los medios

de producción, la banca y el sistema financiero bajo control democrático de la clase obrera puede resolver la barbarie que se dibuja ante nuestros ojos. Pero el socialismo no caerá del cielo. Solamente puede ser el resultado de la acción consciente de la clase obrera y la juventud para derrocar el sistema capitalista.

Los textos de Trotsky que ofrecemos son los siguientes:

- La curva del desarrollo capitalista
- El marxismo en nuestro tiempo
- El nacionalismo y la economía
- A noventa años del Manifiesto Comunista
- Una vez más sobre la 'crisis del marxismo'



La guerra civil. El Frente Popular contra la Revolución

Mieczyslaw Bortenstein (M. Casanova) 256 páginas • 15 euros

La guerra civil española. El Frente Popular contra la revolución fue escrito por el comunista polaco Mieczyslaw Bortenstein, con el seudónimo de M. Casanova, justamente después de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona el 26 de enero de 1939. Es, por tanto, uno de los primeros materiales que hacen un balance general y sistemático de la Revolución española, una vez derrotada, y tiene la frescura de los acontecimientos descritos por alguien que participó en primera línea como combatiente de las Brigadas Internacionales y en la gestión de las fábricas de guerra.

A diferencia de otros libros de memorias o testimonios personales, que tanto abundan en la bibliografía de la guerra civil y la Revolución española, esta pequeña gran obra tiene el mérito de trazar un análisis marxista de ambos procesos, teniendo en cuenta que fue redactada cuando estos se desarrollaban.

Bortenstein, militante de la Cuarta Internacional, señala cómo a través de la acción directa, sin esperar órdenes ni directrices, la clase obrera derrotó el golpe fascista del 18 de julio de 1936 y creó sus organismos de poder (milicias, patrullas de control, consejos de fábrica, tribuna-

les populares...), llevando a cabo realizaciones revolucionarias de un calado incluso mayor que las que tuvieron lugar tras el triunfo bolchevique en octubre de 1917. Pero esto es solo el preámbulo. El libro adquiere toda su profundidad cuando disecciona los factores que condujeron a la derrota política y militar de los trabajadores y la revolución, destacando la nefasta política de colaboración de clases auspiciada e impulsada por el estalinismo.



Marxismo Hoy

Revista teórica de Izquierda Revolucionaria • 5 euros

Dedicamos la nueva edición de *Marxismo Hoy* a dos trabajos que abordan aspectos muy relevantes de la lucha de clases actual: la catástrofe ecológica que nos amenaza y, por tanto, la necesidad de levantar un ecologismo anticapitalista; y el levantamiento del pueblo de Catalunya contra el régimen del 78 y por la república, analizados desde una óptica marxista. Ambos textos, escritos por Víctor Taibo y

Miguel Campos respectivamente, suponen una contribución valiosa a dos debates que están centrando la atención de millones de jóvenes y trabajadores de todo el mundo y también del Estado español. La revista se completa con un artículo sobre las perspectivas políticas para el Estado español tras las elecciones del 10 de noviembre, y nuestra sección de crítica de libros.



Por qué estoy afiliado a

IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

Como afiliado a CCOO y miembro del comité de empresa de El Corte Inglés pronto me di cuenta de la deriva que estaba sufriendo el que en ese momento era mi sindicato, su falta de acción sindical combativa y la ausencia de movilización e intervención en los movimientos de masas.

En Sindicalistas de Izquierda, plataforma sindical impulsada por Izquierda Revolucionaria, fui consciente de la necesidad de luchar por cambiar el sindicalismo actual por un sindicalismo de clase y combativo, independiente de los gobiernos de turno, sin burocracia ni liberados a sueldo de la patronal, etc.

Comprobé que quienes estaban en línea con mis planteamientos sindicales y políticos eran las y los compañeros de IR y eso me llevó a dar el paso de afiliarme. Ahora sí siento que pertenezco a una organización militante, con principios firmes y con un claro objetivo de transformar radicalmente la sociedad.



Felipe Boluda

Secretario general de la sección sindical de Sindicalistas de Base en El Corte Inglés de Goya (Madrid)

CATALUNYA

¡El pueblo en lucha derrota a la derecha españolista!



Esquerra
Revolucionària
Catalunya

El pueblo de Catalunya está protagonizando una movilización ejemplar en defensa de sus derechos democráticos y enfrentando una campaña de mentiras, desinformación y criminalización nunca vista desde la dictadura. Los resultados del 10-N en Catalunya confirman el giro a la izquierda y las conclusiones políticas cada vez más avanzadas que están sacando centenares de miles de jóvenes y trabajadores.

El bloque reaccionario (PP, Vox y Cs), que ya sufrió un batacazo histórico en las generales del 28-A sumando menos del 15% de los votos, recibe otro todavía mayor el 10-N: retrocede en 87.000 papeletas y consigue

un escaño menos. Ciudadanos se hundió aún más estrepitosamente que en el resto del Estado, abandonado por más del 60% de su electorado: 216.373 votos frente a 479.374 en abril, y 2 diputados frente a los 5 de hace seis meses. Si lo comparamos con el más de millón de votos conseguido en las elecciones catalanas de diciembre de 2017, Cs ve esfumarse más del 80% de su base electoral. Por su parte, PP y Vox ganan 179.723 sufragios respecto a abril, lejos de recuperar los 263.001 que Rivera y Arrimadas pierden, y entre ambas formaciones rojigualdas suman 4 diputados de un total de 48.

El bloque independentista avanza

El PSC paga un precio por el apoyo a la represión de sus dirigentes: 171.675 votos menos, aunque consigue repetir sus 12 escaños. También Catalunya en Comú retrocede en 68.932 sufragios, aunque como en el caso del PSC mantiene los 7 diputados de abril. Considerando que Errejón logra solo 40.000 votos, a pesar del descenso de Pode-

mos y PSC, resulta evidente que decenas de miles de jóvenes y trabajadores que votaron a Podemos —indignados con la negativa de sus dirigentes a apoyar la lucha por la república catalana— han depositado su papeleta a favor de ERC y la CUP como ya ocurrió en elecciones pasadas.

Con una participación cuatro puntos menor, solo el bloque independentista incrementa su apoyo: 5.000 votos más en un contexto de represión y criminalización sin precedentes. ERC vuelve a ganar las generales en Catalunya. Este voto no es un apoyo para congelar la república y buscar un acuerdo con el PSOE, o para aplicar recortes y privatizaciones, como están haciendo sus dirigentes desde el Govern. Expresa el rechazo a la derecha españolista y las amenazas de Pedro Sánchez, y la exigencia de llevar adelante la república aplicando políticas en favor de los trabajadores. De hecho, la crítica por la izquierda a sus dirigentes resta a Esquerra 160.458 votos.

Esta radicalización se expresa en la CUP, que por primera vez entra en el Parlamento con 2 escaños y 244.754 votos, doblando su apoyo respecto a las municipales del 26-M, cuando ob-

tuvo 121.274, y también si se compara con lo que logró Front Republicà (coalición de un sector de la CUP con Som Alternativa, escisión de Podemos) en las generales de abril, 113.000 votos.

El carácter revolucionario del movimiento por la república catalana

El significado de estos resultados y de las impresionantes movilizaciones del último mes es muy claro. La situación en Catalunya no tiene nada que ver con la imagen apocalíptica que presentan los medios de comunicación de la clase dominante. Estamos ante el mayor movimiento de masas contra el régimen monárquico del 78 de los últimos cuarenta años. Un levantamiento popular contra la sentencia infame de un sistema judicial plagado de franquistas, y que exige que se haga realidad el derecho legítimo del pueblo catalán a decidir libre y democráticamente su destino, llevando adelante la república por la que votó masivamente el 1 de octubre de 2017.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 5 ▶

